

PABLO POZZI

OPOSICION OBRERA
A LA DICTADURA
(1976-1982)

Cap III, IV y V

Contextual - Eje 1

FOTOCOPIADORA C.E.P. Y C.S. ORIGINALES	385
CARP. N°	1
S/F	
Folio N°	7
D/F	26

CAPITULO III
LA RESISTENCIA OBRERA

 editorial
CONTRAPUNTO

FOTOCOPIADORA
C.E.P. Y C.S.
CARP. N° 38 C S/F: 1

Con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 se inicia la resistencia obrera a la dictadura. Es importante comprender los límites ideológicos de la misma. Siguiendo el análisis presentado por Daniel James vemos que la resistencia pocas veces se generalizó tanto como para constituirse en una crítica implícita a las relaciones de producción capitalista¹. En general la oposición a la "eficientización" no se extendió a un cuestionamiento del derecho del empresario a administrar sus plantas fabriles. "Es obvio que la aceptación de la legitimidad de las relaciones de producción capitalistas y las relaciones de autoridad contenidas en ellas eran en sí mismas reflejo de ciertos postulados básicos de la ideología peronista"². Así el obrero, si bien favorece aumentos en la productividad, en general opina que ésta no debía lograrse "por un aumento incontrolado de la carga de trabajo, sino más bien por una mejor eficiencia del trabajo, es decir, por un menor gasto de esfuerzo físico"³.

Por otra parte, es evidente que a pesar de estos límites, la resistencia de los obreros representaba en efecto un desafío implícito a ciertos aspectos fundamentales de la organización de la producción capitalista; particularmente en lo que se refiere a la necesidad de readecuar el aparato económico a la concentración y la competencia internacional a través del aumento de la tasa de explotación. "A pesar de la inexistencia de un reto explíci-

lamente articulado al control empresarial, el resultado concreto de la insistencia de los obreros en lo que se refiere a la reinterposición de niveles aceptables de rendimiento (...) condujo a un enfrentamiento inevitable con los empleadores"4 y con el régimen dentro de las fábricas.

I

Al darse el golpe, el movimiento obrero en su amplia mayoría ya había iniciado el duro proceso de reajuste aprendiendo de los errores de la época. En base a la experiencia histórica forjada bajo dictaduras anteriores, particularmente la de 1955-1958, se aplicarían métodos de lucha y organización más acordes con la represión desatada y la falta de organización legal. Este proceso fue sumamente costoso puesto que los sectores más combativos y mejor organizados se lanzaron a defender sus conquistas. Así, por ejemplo, tenemos las huelgas automotrices de julio, agosto y septiembre de 1976, que fueron brutalmente reprimidas con desapariciones, detenciones, asesinatos y la ocupación de las fábricas por parte de las Fuerzas Armadas. Lo mismo ocurre con otros sectores obreros: Son los metalúrgicos (marzo de 1976), los portuarios (noviembre de 1976) y los trabajadores de Luz y Fuerza, además de los automotrices, los que llevan la punta en la resistencia obrera a los objetivos socio-económicos del régimen, sufriendo como consecuencia los efectos salvajes de la represión.

Sin embargo, y a pesar de lo denodado de la lucha de estos sectores, la clase obrera ya se había replagado. Es por eso que los conflictos de 1976, que en otro momento (1969, 1971, 1975) se habrían expandido a todo el movimiento obrero desahogado oleadas de medidas de fuerza, no tuvieron ese efecto. El gran valor de estas luchas es que en ellas se van ensayando nuevos métodos y desempolvado viejos, para llegar a las mejores formas de oponerse al régimen. Así el gran saldo positivo

de todas estas jornadas fue el crecimiento en la experiencia de lucha de los trabajadores, además de una profundización del odio de clase que generó la represión. Quedá claro, también, que hubo éxitos parciales como por ejemplo el de los portuarios, que si bien no lograron la totalidad de sus reivindicaciones, sí le arrancaron al régimen aumentos de hasta el 35%.

En el gremio automotriz, el primer desafío lo llevaron a cabo los obreros de la fábrica IKA-Renault de Córdoba el mismo 24 de marzo. Ese día los trabajadores comenzaron el trabajo a reglamento bajando la producción de 40 a 20 unidades y después a 14 el segundo día, mientras se cubrían las paredes de la fábrica con leyendas: "Fuera los milicos asesinos", "Tenemos hambre", "Sabotaje a la superexplotación". El Ejército acudió a la fábrica donde fue resueltamente enfrentado por los obreros que lo obligaron a retirarse. En las semanas siguientes las fuerzas represivas se dedicaron a secuestrar y asesinar a distintos delegados y obreros combativos de la fábrica. A principios de abril en la fábrica General Motors de Barracas (Capital Federal) entró en conflicto la sección pintura, siendo la misma ocupada por fuerzas represivas que arrestaron a tres de los huelguistas. Inmediatamente toda la fábrica entró en huelga, obligando al régimen a liberar a los tres compañeros detenidos. A mediados de mayo comienzan los primeros paros rotativos de 15 minutos en la fábrica Mercedes-Benz. En Chrysler Monte Chingolo y Avellaneda se adoptan medidas similares con cortes de luz de diez minutos. Durante el mes de septiembre las plantas fabriles dedicadas a la producción automotriz protagonizaron una ola de medidas de fuerza consistentes en paros, quites de colaboración, trabajo a desgano y sabotaje.⁵

II

El ejemplo más claro de las luchas durante estos meses es la experiencia del gremio de Luz y Fuerza entre octubre de

Este movimiento de lucha que se prolongó durante los meses de octubre y noviembre, se caracterizó por paros, abandono de tareas, intentos de movilización, trabajo a desgano y gran cantidad de apagones en diversas zonas. El gobierno militar respondería con represión, amenazas de movilización militar, detenciones, torturas, secuestros.

El día 23 de octubre de 1976 la Agencia de Noticias Clan destina (ANCLA) entrevistó a uno de los delegados despedidos de SEGBA enrolado en el "peronismo combativo". La entrevista es ilustrativa de los criterios y tácticas que aplicaban los delegados y activistas de base en el conflicto de Luz y Fuerza.

El delegado comienza explicando que "(...) el día 5 de octubre nos enteramos de algo que desde tiempo atrás se venía rumoreando. El gobierno había dispuesto alrededor de 260 cesantías en SEGBA y entre ellos me encontraba yo. Los echados eran trabajadores con mucho tiempo de labor en la empresa. Gente muy querida y respetada por todo el personal. Creo que eso fue lo que nos hizo reaccionar con tanta rapidez. También había quedado en la calle casi todo el plantel de delegados sindicales y algunos activistas del peronismo y la izquierda.

—ANCLA: ¿Los dirigentes sindicales cesanteados eran respetados por el personal?

—Mire, éste era un tema espinoso. Como usted sabrá, los dirigentes respondieron hasta el último momento a la línea del peronismo gobernante. Entre ellos estaba el secretario general de nuestro gremio, Oscar Smith. Antes del golpe militar, las bases planteaban a estos dirigentes que 'con Isabel no pasaba nada' y que nos estábamos hundiendo en la miseria. Lo que pasa es que a pesar de todo nuestro sindicato es muy especial. Muchos de los delegados —y entre ellos me incluyo— nunca aprovechamos las prebendas de nuestro cargo y seguimos trabajando. Eso hizo que la gente, a pesar de no coincidir plenamente con algunas posturas políticas —como

73

1976 y marzo de 1977, que demuestra claramente el cambio en los métodos de lucha aplicados y la transformación en las características de la resistencia ante el fracaso de una táctica de enfrentamiento abierto a la ofensiva de la dictadura.

Al producirse el golpe militar de 1976 fue intervenido el sindicato de Luz y Fuerza (abril de 1976); 260 empleados de la empresa SEGBA fueron cesanteados, entre ellos el dirigente Oscar Smith y muchos delegados sindicales; se aprobó la Ley 21.476 que derogaba todos los regímenes laborales de excepción de que gozara el personal de las empresas del Estado. "Se eliminaban la bolsa de trabajo, la prioridad para el ingreso de los familiares de empleados, las tarifas preferenciales en los servicios para el personal, los permisos para los delegados, los sistemas de becas para perfeccionamiento, la participación de los representantes sindicales en promociones laborales. También cesaba la participación del personal en la fijación de dotaciones y plantales y en la distribución de tareas. Se rebajaba del 7,50% al 6% el aporte de la empresa a la obra social del sindicato, y finalmente, se alteraba el régimen horario y, consecuentemente, la remuneración de los trabajadores. La semana laboral pasaba de 36 a 42 horas..."⁶

A partir del día 5 de octubre de 1976 los trabajadores del gremio de Luz y Fuerza, que comprende todas las empresas de electricidad (SEGBA, Agua y Energía, DEBA, Compañía Italo Argentina de Electricidad), privadas y estatales, iniciaron una huelga de brazos caídos en protesta por el despido de 208 de sus compañeros, como consecuencia de la aplicación de la Ley de Prescindibilidad; el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo; la rebaja indiscriminada de las remuneraciones; la falta de pago de los incrementos salariales, de la aplicación de sanciones al personal por reclamar tales derechos; la negativa a depositar los aportes de los propios trabajadores al Fondo de Obra Social del sindicato; y la amenaza por parte de la Comisión Militar de Asesoramiento Legislativo de cercenar las conquistas alcanzadas y consagradas en el convenio colectivo del gremio.

72

bamos de los grandes dirigentes sindicales como aquéllos que hasta ayer se decían peronistas y hoy se callan la boca ante la agresión militar a nuestro gremio. En cambio, nos sorprendió la adhesión espontánea de numerosas comisiones internas de otros gremios que se acercaron a traernos su apoyo y su afecto. Como siempre, el arma más efectiva de los obreros es su solidaridad y gracias a ella podremos continuar la batalla.

(...) Creo que somos los protagonistas de uno de los primeros grandes desafíos al gobierno de facto. Junto con los obreros mecánicos, los trabajadores de Luz y Fuerza hemos salido a decirle a este gobierno que todos estos años de experiencia sindical combativa no han sido en vano. (...) Es evidente que ellos quieren la 'reorganización' del país a costa de nuestro esfuerzo y no del de los patrones. Entonces como ya pasó con otras experiencias militares, nuestro camino no puede ser otro que el de la lucha. Quizás a Luz y Fuerza hoy lo puedan derrotar. Quizás, pero ¿qué van a hacer mañana con los telefónicos, con los de Gas del Estado, con los petroleros, con los bancarios, con los metalúrgicos, con los mecánicos? ¿O es que acaso van a hacerle creer a alguien que somos todos terroristas y asesinos? Ellos tendrían que mirar para atrás y pensar en Aramburu, en Onganía, en Levingston y en Lanusse. Todos en su momento trataron de aplastar nuestros derechos. A todos, tarde o temprano la impaciencia popular les dio su merecido. Por eso, yo les diría a los militares que recapaciten sobre lo que están haciendo".

Reconstruyendo los hechos⁸, podemos identificar las principales características del conflicto como las siguientes: el día 5 de octubre comienzan los paros ante el despido de 260 trabajadores; el mismo día interviene el Comando Militar Zona I y son custodiados locales y maquinarias. Los días 7, 8 y 9 de octubre hubo muchas detenciones: 90 operarios de SEGBA, 27 en Puerto Nuevo y 18 en Pilar. También se produjeron detenciones en Italo y en las sedes de SEGBA en Quilmes, Lanús, San Miguel, Morón y en la Central Costanera. En Agua y

Energía fueron despedidos 40 trabajadores⁹. El día 8 fueron sequestrados en sus domicilios tres obreros de la empresa SEGBA: Víctor Seijo, Amado Mieres y Oscar Pellizo, lo que produjo el agravamiento del conflicto¹⁰. Es de notar la solidaridad y firmeza que existió entre los trabajadores de Luz y Fuerza. Por ejemplo, a mediados de octubre un representante de Luz y Fuerza pidió a los ingenieros la lista de los delegados a lo que se le respondió que "desde el 24 de marzo no hay más delegados". Este gesto solidario fue compartido por todo el personal desde ingenieros hasta empleados, pasando por subcapataces y contramaestres¹¹. Se inició una gigantesca ola de sabotajes con explosivos en la que fueron destruidas 14 cámaras transformadoras, la mayoría en la parte sur del Gran Buenos Aires; además de apagones, sobrecarga de tensión y otros trastornos¹². El día 12, en las distintas seccionales de SEGBA se realizaron paros y manifestaciones que fueron violentamente reprimidas por personal de la Policía Federal al mando del propio jefe de la repartición, general Edmundo Ojeda; la Justicia Federal hizo saber su preocupación ante la imposibilidad de asumir la investigación de la responsabilidad penal de todos los posibles imputados, por carecer de medios materiales para ello. En la Capital, el mismo día 12, resultaron detenidos 100 trabajadores del gremio. En San Martín, provincia de Buenos Aires, fueron detenidos 42 trabajadores más. Al día siguiente se produjo el desalojo por parte de las fuerzas de seguridad del personal que se encontraba realizando su trabajo a desgano (calificado por los trabajadores como "trabajo a tristeza"). En la Central Costanera intervinieron tropas de la Prefectura Naval y de la Infantería de Marina para impedir que el personal se declarara en huelga. El mismo día 13, en Lomas de Zamora, tropas del Ejército ocuparon la usina de SEGBA y detuvieron a dos obreros, otros dos fueron detenidos en la Central Costanera, uno en Olivos y en Rosario (provincia de Santa Fe) otros varios, entre ellos el dirigente Neifés Juncos¹³. Todos los establecimientos fueron ocupados por fuerzas militares el día 14 de octubre "con arma-

ser el apoyo al gobierno de Isabel— nos respetara y acatará en nuestras decisiones. Luz y Fuerza tiene fama bien ganada de ser un gremio fuerte. No sólo por las conquistas logradas sino por la compacia unidad con que siempre ha luchado.

Nosotros le hicimos la guerra a López Rega desde el principio y no es casualidad que hoy seamos los primeros en desafiar a esta dictadura militar. El actual conflicto es una respuesta de la base a la prepotencia y a la injusticia (...)

—ANCLA: ¿Cuál fue el camino seguido por ustedes desde que se enteraron de las cesanías?

—El día 5 a la noche celebramos una reunión de delegados y el 6 comenzó la huelga.

Empezamos en el Centro de Cómputos (...). Desde ese momento la orden de paro se extendió como un reguero de pólvora hacia otras dependencias de la Capital y Gran Buenos Aires.

En las reuniones que matuvimos con otros delegados y activistas formamos comisiones de propaganda, que se encargaron de hacer volantes explicando los motivos de nuestra lucha. También se creó una comisión de organización y le enlace. Después reunimos a la gente edificio por edificio y les dijimos que la lucha que empezábamos no iba a ser fácil, que era probable que nos aplicaran la Ley de Seguridad y que algunos de nosotros fuéramos detenidos pero que la única salida para esta acción terrorista— así la calificábamos— era resistir con la unidad y el coraje de los trabajadores. Los compañeros nos ovacionaron en todas las asambleas y juntos cantamos la marcha de Luz y Fuerza. (...)

Al ver que los milicos se ponían cada vez más duros, los muchachos empezaron a responder con la misma moneda. Usted sabrá que para un hombre que viene trabajando muchos años entre los cables y las cámaras, provocar un cortejo de energía es muy simple. Así comenzaron los alentados.

Muchos nos acordábamos de las cosas que les hicimos a los gorilas en 1956 y las volvimos a aplicar. Aquí hay una co-

sa que aclarar: cuando los trabajadores de una especialidad se deciden a sabotear la producción, es imposible intentar todo tipo de represión ya que es posible que encarcelen a cientos pero con uno que quede, el sabotaje está asegurado. Por eso es que nos pareció muy torpe la actitud del gobierno al enfrentarnos con tanta altivez.

—ANCLA: ¿En qué consiste lo que ustedes denominan el trabajo a triseza?

—Es una variante de lo que se llama trabajo a desgano. Nosotros decimos que no podemos trabajar porque estamos tristes. Tristes porque echan a nuestros compañeros. Tristes porque ganamos poco. Tristes porque cercenan nuestros convenios. En fin, hay miles de razones para que los trabajadores argentinos hoy estemos tristes. Por eso no levantamos un dedo para hacer lo que nos mandan.

En este sentido fue muy gracioso ver compañeros de la oficina de Alsina cómo respondían a los continuos aprietes de la patronal. Había una inactividad total y entonces se sentía el griterío de los efectivos militares que entraban al local, y la voz de un oficialito que ordenaba: 'Al que no trabaje lo llevo preso'. Los compañeros lo miraban con 'triseza' y comenzaban a moverse en sus sillas lentamente como si fueran a iniciar sus tareas. Entonces el oficial ordenaba la retirada de sus tropas. A los pocos segundos los compañeros volvían a la posición inicial ante la mirada atónita de los jefes. Este procedimiento se repetía varias veces hasta que las tropas ordenaban el desalojo del local y los mandaban a sus casas. Los compañeros se retiraban silbando la marcha del gremio.

—ANCLA: ¿La respuesta de los trabajadores lucifueris-
tas contó con adhesiones de otros gremios?

—Por supuesto. Hay que aclarar que todo nuestro accionar es el producto de la unidad y la organización por la base, tratando de que nuestras banderas de lucha no caigan en manos de quienes siempre han negociado nuestras conquistas. Por eso es que los trabajadores de Luz y Fuerza poco esperá-

4

2

en su horario habitual, desafiando abiertamente a las autoridades.²²

El Ministerio de Trabajo notificó que aplicaría la Ley 21.400 sobre seguridad industrial al personal que no acatará el nuevo régimen laboral. Severos cordones policiales rodearon las plantas de SEGBA y CIAE, mientras SEGBA cursaba amonestaciones a 20.000 de los 24.000 trabajadores que emplea. Las notificaciones eran devueltas sin firmar. Fueron secuestrados los obreros Pardo, Giordano, Santos, Cao, Piñeyro y Barucci, a los que no se volvería a ver con vida²³.

El 11 de febrero de 1977, y ante la intransigencia de Oscar Smith, dirigente de Luz y Fuerza de Capital Federal, que se negaba a poner coto a sus afiliados, las Fuerzas Armadas lo hicieron desaparecer. Coinciden Oscar Lezcano y Juan José Taccone, dirigentes del mismo gremio, en afirmar que Smith había ya logrado un acuerdo de cinco puntos con la dirección de SEGBA que significaba la solución del conflicto²⁴. El posterior secuestro dejó este acuerdo sin efecto. La respuesta de los trabajadores fue el abandono de sus tareas a partir de las 10 horas. El 16 de febrero miles de trabajadores lucifuerzistas volvieron a parar y se declararon en estado de alerta en reclamo por el dirigente desaparecido. Una vez más, el 11 de marzo varios miles de trabajadores se congregaron frente a la sede del sindicato, a cuatro cuadras de la Casa de Gobierno; fueron dispersados por las fuerzas de seguridad²⁵.

La lucha de Luz y Fuerza no fue la única, si bien por su magnitud y duración fue una de las más documentadas. En apariencia el observador superficial estimaría que el gremio fue derrotado, puesto que toda esta lucha y la represión desatada desgastaron tremendamente al gremio de Luz y Fuerza: fueron muchísimos los trabajadores encarcelados, secuestrados y despedidos durante los cinco meses del conflicto. Después de marzo de 1977, Luz y Fuerza no protagonizaría más jornadas de lucha tan frontales, aunque sí se sumará a las distintas mo-

vilizaciones en noviembre de 1977 y en 1979. Sin embargo también el régimen sufrió un desgaste apreciable. La ofensiva militar perdió un tiempo precioso. El miedo a desatar una explosión popular similar al "Cordobazo" hizo que la Junta vacilase en la aplicación del proyecto gremial²⁶.

Lo más valioso de las luchas del movimiento obrero durante esos meses fueron las lecciones dejadas. Era posible enfrentarse a la dictadura mientras no se brindaran blancos que facilitaran la represión. La unidad, solidaridad y firmeza de los trabajadores era la clave de la resistencia. Esto sólo podía ser garantizado por la organización clandestina por la base, tal como apuntó más arriba el delegado de Luz y Fuerza. Había que evitar métodos y formas organizativas que señalaran con facilidad a los dirigentes. En este sentido, distintos testimonios certifican que se recurre principalmente a la experiencia de la "Resistencia Peronista" (1955-1957), y que junto con ésta hay un grado importante de innovación. Así, en base a la experiencia y al ejemplo, se concretan a través de 1976 una serie de formas de lucha que se ajusta a una correlación de fuerzas desfavorable y a la represión salvaje: "trabajo a tristeza", trabajo a reglamento, quite de colaboración y principalmente el sabotaje.

Los resultados se hicieron sentir: a fines de 1976 Renault anunció que su producción había bajado en un 85%; en la siderúrgica Dálmine el 30% de las chapas salían fisuradas; el 25% de los automóviles que producía General Motors estaba dañado; en Peugeot se saboteaba en serie los bloques de motor; en el Frigorífico de Reconquista fueron dañados los congeladores de carne para exportación; en SOMISA los obreros oxidaron sistemáticamente las grandes planchas de acero ardiente; en la fábrica Ford fueron destruidos los motores de 30 patrulleros Falcon encargados por la Policía Federal; en el Frigorífico Swift toneladas de carne destinadas a la exportación fueron inutilizadas al ser pinchadas las cámaras frigoríficas que las conservaban; en Mercedes-Benz un día desaparecieron todos los instrumentos de medición; en Dálmine de Campana fue in-

mento de combate", obligando a los trabajadores a desalojar las dependencias¹⁴.

La inactividad era casi total en las empresas eléctricas de la Capital Federal, Gran Buenos Aires y provincia de Santa Fe. Quedaron sin electricidad, por amplios "apagones", diversas zonas. El sabotaje se combinó con el trabajo a reglamento, las paralizaciones y la guerra psicológica. Una bomba de alto poder explotó en la sede de SEGBA que había sido previamente evacuada gracias a un llamado anónimo. Tres bombas más, inofensivas, sin detonador, fueron encontradas en el policlínico de Luz y Fuerza. Se sucedieron docenas de llamadas telefónicas anunciando bombas en múltiples instalaciones de SEGBA, CIAE y Agua y Energía que resultaron ser falsas, pero que obligaron a evacuar interrumpiendo las tareas¹⁵. A su vez, el conflicto se extenderá al interior abarcando Córdoba, Tucumán, Catamarca y Salta, totalizando más de 36.000 lucifueristas. El conflicto provocó, además, el paro solidario de los obreros telefónicos de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEI), que el 8 de octubre hicieron enmudecer 38.000 teléfonos de la Capital Federal¹⁶.

El día 14 de octubre, en horas de la madrugada, reaparecieron los obreros Seijo, Mieres y Pellizo que habían sido secuestrados el 8. Según despacho de la agencia oficial de noticias Telam "los trabajadores habían sido golpeados, presentando señales evidentes de los malos tratos recibidos". En efecto, los tres habían sido bárbaramente torturados. Continúa la detención de trabajadores. Ante la falta de solución del conflicto y como forma de presión, a partir del día 28 de octubre, comenzaron gigantescos "operativos rastrollo". Ese día fueron registradas 400 manzanas de zonas del Gran Buenos Aires (Banfield, Lomas de Zamora, Temperley, Adrogué, Burzaco) donde se encuentran importantes barrios de trabajadores de Luz y Fuerza¹⁷. El día 2 de noviembre, en los barrios del personal de SEGBA en Morón, provincia de Buenos Aires, la Fuerza Aérea realizó otro operativo rastrollo de gran magnitud¹⁸.

En la primera semana de noviembre, secuestraron al obrero Balvarena, de SEGBA, junto con su esposa y un familiar. Se reiniciaron los paros de repudio, reclamando su aparición. A los cinco días, Balvarena apareció hospitalizado en un sanatorio de la zona sur del Gran Buenos Aires, como consecuencia de las graves heridas sufridas durante su detención. El día 16 de noviembre, esposas, madres y familiares de 39 obreros que continuaban detenidos en poder de las fuerzas de seguridad, presionaron con su presencia en los despachos de las autoridades por la libertad de los mismos. El personal paralizó sus labores expresando de viva voz su solidaridad con la gestión que aquellos cumplan. La respuesta del gobierno no se hizo esperar: en la madrugada del día 17 un grupo de personas fuertemente armada secuestró a Santiago Romaniach, obrero de la empresa CIAE¹⁹.

La actividad continuó a través de diciembre, enero y febrero con paros, trabajo a desgano y una gran cantidad de sabotajes. Se reclamaba la continuidad del régimen de trabajo. En Rosario, Córdoba y Corrientes se formaron comisiones coordinadoras que pronto se extendieron a las demás provincias²⁰. Para preservarse de la represión las coordinadoras adoptaron un carácter semiclandestino, reuniéndose a la salida del trabajo. El 26 de enero se realizó una movilización con miles de trabajadores lucifueristas frente a la sede del sindicato Capital, en Belgrano y Defensa, coreando consignas contra la dictadura²¹. El 29 de enero fueron saboteados los transformadores de energía de Balán (Mar del Plata). En los días siguientes hubo incendios en las plataformas de La Plata, Quilmes, Bernal, Ranelagh, en el centro de elevación de línea a Magdalena, en la plataforma de San Antonio de Padua y en la subestación de Agronomía. El 4 de febrero se produjeron múltiples inundaciones en cámaras de distribución y fallos en la red. El lunes 8 de febrero, en vigencia ya el nuevo régimen de trabajo para Luz y Fuerza en todas las plantas, el personal abandonó el trabajo

cendiado un cable de alimentación a los altos hornos; en Kai-ser de Córdoba la introducción de bulbones en los motores de armado provocó la destrucción de unidades y la producción bajó al 10%; en las obras hidroeléctricas de Salto Grande fue interrumpido el suministro de agua a una máquina que realiza la mezcla, provocándose el endurecimiento del cemento en su interior por lo que se debió suspender el trabajo durante dos jornadas; en Sudamlex de Capital Federal se hicieron cortes en bobinas de telas y hebras de hilo ocasionando grandes pérdidas; a la empresa; en Ciudadela fueron cortadas en un noche treinta ligas en los rieles del Ferrocarril Sarmiento?²⁷

En todo esto es notable el nivel de solidaridad y unidad desplegada por los trabajadores. Más arriba mencionamos el caso de General Motors. Otro ejemplo ocurre en la fábrica ENA donde la suspensión de tres obreros provocó una huelga con la intervención del Ejército que detuvo a seis trabajadores, incluyendo a los suspendidos. Inmediatamente más de mil obreros de las fábricas vecinas (Editorial Abril, Refinerías de Maiz, etc.), se concentraron frente a ENA manifestando su apoyo. Las patrullas militares, que en cierto momento parecían dispuestas a abrir fuego sobre los obreros, acabaron por negociar la libertad de los presos y anularon las tres suspensiones a cambio de la normalización de las actividades²⁸. En De Carlo, el 14 de mayo se efectuó un paro total por la detención de tres obreros. El 7 de septiembre de 1976 los trabajadores celebraron el "Día del Metalúrgico" a pesar de que el régimen lo había abolido. En la Empresa Ladrillos Olavarría S.A. los militares no pudieron descubrir quiénes eran los autores de pintadas a la entrada de la fábrica gracias a que no obviaron la colaboración de los trabajadores. En la fábrica de tractors Massey-Ferguson, de Rosario, los obreros lograron rechazar a "carneros" que había reclutado la empresa para solucionar el quite de colaboración. En Rigolleau, la prensa clandestina informó que un obrero detectado como infiltrado de los servicios de seguridad

dad en la fábrica sufrió un accidente mortal al caerse en un horno²⁹.

A esto se puede agregar la inventiva de los trabajadores para lidiar con la represión. Por ejemplo, a fines de 1976 el Ejército acudió a la fábrica Peugeot que se encontraba en huelga. Al llegar fueron enfrentados por los 5.000 obreros al grito de "¡Argentina! ¡Argentina!" que posteriormente pasaron a cantar el himno nacional. Ante semejante demostración de patriotismo, el oficial al mando de la tropa dudó entre el reglamento y reprimir, momento en el cual los obreros aprovecharon para iniciar un diálogo exponiendo ante los soldados sus condiciones de vida y exigiendo la libertad de seis compañeros detenidos, cosa que lograron³⁰. Para la misma época ocurrió un incidente similar en la fábrica Mercedes-Benz donde también se recurrió al himno nacional para frenar la ocupación por parte del Ejército³¹.

III

Como resultado de los conflictos de 1976 al año siguiente, 1977, fue con escasas excepciones, un período repleto de "tristezas" y sabotajes sin movimiento espectacular ni conflictos masivos. Es un período en el cual se avanza en los métodos de lucha, y se desarrollan formas de organización que protejan a los activistas y delegados que reemplazan a los miles golpeados por la represión. La acumulación de fuerza y el desarrollo en conciencia avanza pero sin brindar blancos, evitando los enfrentamientos y cuidando celosamente lo que se logra construir. Hay varios índices de este avance. El primero ocurrió del 13 al 17 de junio en la zona industrial de Rosario y San Lorenzo (provincia de Santa Fe). Más de 6.000 trabajadores agrícolas se sumaron a varios conflictos de obreros industriales, mientras que la policía hacía evacuar los establecimientos. El resultado de estas acciones fue un escaso aumento del 20%

junto con docenas de detenciones y despidos. Sin embargo, llamó la atención la unidad entre trabajadores del campo y obreros industriales en una zona que venía siendo muy golpeada por la represión desde 1974³². Otro índice claro de este avance se da en agosto de 1977, cuando los transportistas petroleros realizan una medida de fuerza claramente política contra la empresa Shell y Exxon, por el intento del régimen de privatar las bocas de expendio³³.

Todo confluye hacia el primer salto en calidad de la resistencia del movimiento obrero bajo el régimen militar. *"Hacia mediados de octubre, en Córdoba, los obreros de IKA-Renault reclamaron un aumento salarial del 50%. La empresa respondió ofreciendo un 15%. Los trabajadores rechazaron la oferta y comenzaron la huelga de brazos caídos. Al día siguiente el Ejército entró en la fábrica a exigir, a punta de bayoneta, que se comenzara a trabajar. En una sección, un oficial arengó a los obreros explicando la necesidad de obedecer a los superiores y no reclamar aumentos... del mismo modo que los militares no hacen huelga para exigir mejores sueldos. La reacción fue inmediata: toda clase de proyectiles se descargaron sobre el oficial y se generalizó la batalla, en la que los militares hicieron uso de las armas con el trágico saldo de cuatro obreros muertos. Al día siguiente se produjo un abandono masivo de tareas. Seis mil obreros, bajo una represión despiadada, se movieron masiva y unitariamente, sin ninguna organización legal"*³⁴. Ciento treinta trabajadores fueron detenidos y posteriormente despedidos.

La huelga de IKA-Renault duró cuatro días y logró romper la muralla del silencio. La prensa comenzó a hablar de *"amenaza de Córdoba"* y pusieron de manifiesto el amplio apoyo que el conflicto tuvo en los distintos gremios que comenzaban a organizarse para plegarse a la lucha³⁵. Lo esencial fue que el conflicto ganó la calle y puso a la orden del día en todo el país la necesidad de ir a la huelga para recuperar los salarios.

Poco tiempo después se desató la huelga ferroviaria y la de

correos de La Plata. Rápidamente se sumaron subterráneos de Buenos Aires, los pilotos y el personal técnico de líneas aéreas, el Hipódromo de Palermo, ENTEL, petroleros, marítimos, portuarios de Rosario, Luz y Fuerza, trabajadores del Estado, colectivos de Buenos Aires, empleados de Comercio, Pétroquímica Argentina, Alpargatas, bancarios, SAFRAR-Peugeot, transportes de Mendoza, frigoríficos, y transportistas de náutica³⁶. En noviembre, veintinueve sectores gremiales representando a miles de trabajadores habían suspendido sus actividades laborales, reclamando sobre todo mejoras salariales³⁷.

La iniciación de la oleada de huelgas y su persistencia se produjeron al margen y, a veces, en contra de las direcciones sindicales, poniendo en evidencia un nivel de organización subterránea que podía abarcar gremios enteros. Se repitieron asambleas de base y de delegados, y allí, la burocracia sindical se vio constantemente rebasada. La huelga ferroviaria de octubre fue el ejemplo más claro de un movimiento de fuerza gestado y lanzado semiclandestinamente, que logró realizar asambleas en los lugares de trabajo, eludiendo al aparato represivo; fue un conflicto de alto contenido político, pues cuestionó el plan de privatización de los ferrocarriles y amenazó en convertirse en una huelga general, concluyendo en forma exitosa en materia de reivindicaciones salariales satisfechas³⁸.

Al igual que en 1976, fue notable el nivel de conciencia y unidad a través de los conflictos. Por ejemplo, los trabajadores de subterráneos, al enterarse de la detención de algunos compañeros después de finalizado el paro, volvieron de inmediato y masivamente a la huelga para lograr su liberación³⁹. Aún más ilustrativo fue el caso de los ferroviarios. La detención de varios trabajadores durante el paro llevó a la decisión de continuar con las medidas de fuerza hasta su liberación. Eso a pesar de la muerte del ferroviario Alberto Pantaleón durante una sesión de tortura, y de la de otro que fue pasado por las armas en la estación de Constitución, en Capital Federal, acusado de incitar a la huelga. Asimismo, los trabajadores de SEGBA aban-

donaron sus puestos de trabajo en protesta por la "desaparición" del delegado sindical Juan Luis Bongioio⁴⁰.

Las reivindicaciones pedidas fueron: Pesos Ley 10.000.000 de salario mínimo; restitución de las conquistas sociales; normalización del cuerpo de delegados y del sindicato; reincorporación de los cesantes y defensa de las fuerzas de trabajo; y una más que casi no trascendió a los medios de comunicación: la renuncia de Martínez de Hoz al Ministerio de Economía⁴¹.

Los resultados fueron notables. Era evidente que el terror en su más cruda acepción había quedado atrás⁴². Pero además se consiguieron aumentos salariales: en ENTEL se obtuvo el 100%, el 83% en Gas del Estado, y el 43% en Ferrocarriles Argentinos⁴³. Podemos señalar que se había producido un cambio en la correlación de fuerzas entre el movimiento obrero y el régimen militar. A diferencia del año anterior, el paro de Renault desencadenó una oleada de huelgas bien organizadas y desde la base; la represión no tuvo blancos fáciles por la magnitud de la movilización y por el tipo de organización.

IV

El avance concretado a fines de 1977 obtiene un margen de maniobra para el movimiento obrero dando un nuevo impulso a la acumulación de fuerza del mismo. En 1978 se produce un importante aumento en la cantidad de conflictos y medidas de fuerza; la revista *Mercada* registra 1.300 de ellos en la primera mitad del año⁴⁴. A su vez se calculan en 4.000 los conflictos a través del año⁴⁵. Los principales fueron el de portuarios (julio), el de Fiat (octubre) y el del Frigorífico Swift de Rosario (octubre). Se registraron movilizaciones de bancarios y transportistas. Hubo un nuevo paro ferroviario a fines de noviembre que resultó exitoso, y en diciembre entraron en huelga varias empresas entre ellas Renault y Fitesón de Lavallol. Es de notar que la mayoría de los conflictos no trascienden a la prensa y

que son en general pequeños y de corta duración. Es por esto que todo cálculo en cuanto a número de conflictos debe necesariamente ser inexacto, aunque sirva como referencia para una orientación general.

Todo confluye hacia un segundo pico cualitativo que ocurre durante 1979. Decimos durante porque, a diferencia del primer pico en 1977, éste no tiene una sola acción concreta, una oleada de huelgas que lo muestre, sino que se nota por varios hitos cualitativos que marcan el avance en la acumulación de fuerzas del movimiento obrero. Entre estos hitos tenemos la primera toma de fábrica desde 1976 cuando, el 8 de marzo de 1979, entran en conflicto los obreros de Aceros Ohler⁴⁶. En abril los 3.800 obreros de Alpargatas decretaban, en tumultuosa asamblea en la puerta de la fábrica, un paro por tiempo indeterminado. Tres meses más tarde ocurren tres tomas más: las metalúrgicas Cura Hnos., IME y La Canábrica⁴⁷. El 16 de septiembre tiene lugar la huelga de Peugeot que muestra no sólo la coordinación a nivel de la industria automotriz de la base del SMA TA, sino que asume características primordialmente políticas, al cuestionar la política salarial del régimen. Los trabajadores de Peugeot pedían la equiparación salarial con la empresa líder y el convenio por industria y no por empresa⁴⁸. Al mismo tiempo, los colectivos de San Miguel de Tucumán realizaron una movilización en demanda de aumentos. También reveladora fue la huelga de Swift, el 8 de noviembre, que resultó en la toma del frigorífico por parte de los trabajadores y la comunidad demostró la coordinación entre los trabajadores y la comunidad de Berisso, la cual apoyó activamente la medida de fuerza⁴⁹. Y por último, remarcamos el "paro sorpresivo" de transporte en Rosario, en diciembre de 1979, que coordinó a cinco gremios al margen de las direcciones nacionales de los sindicatos⁵⁰.

El factor subyacente fue el aumento significativo en la cantidad de conflictos: los cálculos basados en las medidas de fuerza reportadas en la prensa (necesariamente muy por debajo

de la realidad) dejaban un saldo de más de 500.000 días/hombre de paros durante los primeros diez meses de 1979, o sea cinco veces más que en 1978⁵¹. A su vez, Arturo Fernández calcula que el número de conflictos duplicó los producidos en 1977 y cuadruplicó el número de trabajadores que participaron en los mismos⁵². Finalmente, es importante recordar que empieza a darse una cooperación entre los trabajadores y los pequeños y medianos empresarios que en varios casos llegaron a apoyar medidas de fuerza que aportaron al deterioro del régimen⁵³.

Tanto la implícita alianza con otros sectores sociales como el hecho de que el movimiento obrero retomase en 1979 formas de lucha (tomas de fábrica, huelgas por tiempo indeterminado, movilizaciones como las de Swift y San Miguel de Tucumán) que no habían tenido éxito en 1976 y que no se habían aplicado en 1977 y 1978, significa claramente un desarrollo en la acumulación de fuerza propia.

Dentro de este panorama se ubica la Jornada Nacional de Protesta del 27 de abril de 1979. La extensión real de la misma no se ha medido con justicia. El comité de huelga clandestino, organizado por la Comisión de los 25, estimó que el 75% de los trabajadores habían acatado la medida. En general se admite que esa cifra está bastante inflada y que el porcentaje se acerca más al 40%⁵⁴. De todas maneras, si bien la huelga no logró detener al país, sí logró alterar sustancialmente la normalidad en el cinturón industrial del Gran Buenos Aires y de las principales ciudades del interior⁵⁵. La importancia de la medida no se debe tanto al número de obreros que hayan o no acatado el paro, sino más bien al hecho de que éste fue llamado por un sector de la burocracia sindical, demostrando en concreto la presión que ésta sentía para tomar medidas más combativas respecto del régimen. Así, en la resolución que llama a la Jornada de Protesta dicen: "...Sentimos sobre nosotros la mirada inquietante de los trabajadores que podrían sentirse abandonados a su suerte, lo que determina nuestra decisión de

*colocarnos a la cabeza de la protesta que se generaliza para unificarla con la decisión de una propuesta nacional"*⁵⁶.

Es evidente que, si bien la protesta de la clase obrera no expresa un proyecto de sociedad concreto, éste existe larvadamente en su práctica y reivindicaciones cotidianas. Algunos aspectos son obvios, tales como una redistribución más igualitaria del ingreso nacional o un desarrollo económico basado en el crecimiento del mercado interno y de la industria nacional. Pero también existen otros que llevan a un cuestionamiento implícito del sistema. En las medidas de fuerza de la clase obrera hay un gran énfasis en el control sobre la producción por encima del respeto a la propiedad privada. Las reivindicaciones no son solamente salariales sino que también reivindican el derecho a la organización social, y ante todo definen el terreno de la lucha no tanto en el nivel económico sino en el de la autoridad. Así por encima de las reivindicaciones salariales muchas veces se encuentra la lucha contra conceptos tales como la "prescindibilidad", la "productividad", la elección de representantes obreros, la autoridad del capataz o de las fuerzas de seguridad por encima de la comisión de fábrica, o el negociar por oficio o por lugar de trabajo y no por industria. Asimismo, el énfasis en la solidaridad de clase refleja un modelo social en el cual el acento se encuentra en el grupo y no en el individuo.

Al igual que Torre y Petras en la "Introducción", podemos inferir un proyecto socio-económico autónomo de la clase obrera, que si bien coincide en aspectos generales con los reclamos del capital nacional y los grupos nacionalistas del período 1946-1950, contiene elementos más radicalizados. Particularmente el claro énfasis en aspectos colectivistas y de control obrero sobre la producción contienen puntos de contacto con un proyecto socialista⁵⁷.

V

A partir de 1979 se nota una aceleración en el proceso de acumulación de fuerzas del movimiento obrero. Ya a fines de 1980 ocurren las tomas de varias fábricas más (Deutz, La Canábrica, Sevel, Merex); paros coordinando la comunidad con los trabajadores (Tafí Viejo, Ingenio Nuñorco); coordinadoras clandestinas a nivel nacional (trabajadores del Estado, transportes); movilizaciones (Deutz, La Canábrica). A esto se agrega el "paro sorpresa" cuyas características son: corta duración, total sorpresa, y niveles de organización muy altos que permiten conseguir desde la base una gran efectividad. Ante el paro sorpresa, la fuerza represora se siente impotente. Los conflictos no le dan tiempo para actuar. Cuando se enteran del hecho, ya no hay margen de acción porque éste ha concluido. Además, los trabajadores se mantienen en sus lugares de trabajo, lo que les permite obrar con rapidez y aprovechar al máximo el factor sorpresa.

Sobre la actividad huelguística de 1980 es útil considerar algunas estadísticas basadas en la información periodísticas. Durante los primeros seis meses del año se registraron 79 medidas de fuerza de magnitud cuya distribución fue:

Mes	Nº de medidas de fuerza	Nº de obreros parados
Enero	13	3.299
Febrero	7	2.000
Marzo	12	6.940
Abril	20	25.625
Mayo	22	32.337
Junio	21	45.422
total	79	87.811 ⁵⁹

El mes de enero no se puede tomar como indicativo ya que es un mes atípico en las luchas sindicales en Argentina⁶⁰. Se ve

claramente como a partir de febrero hubo una constante en el aumento de trabajadores parados. Los conflictos, en cambio, reducen su ritmo de crecimiento en mayo y presentan en junio una cifra inferior a la del mes precedente. Esto indica una mayor concentración.

A pesar de los despidos y suspensiones, desde febrero no existió una depresión en el ritmo de crecimiento del número de trabajadores en conflicto. La distribución de los mismos fue: Capital Federal y Gran Buenos Aires: 54 conflictos. Otras zonas del país: 25 conflictos.

Los conflictos producidos en Capital Federal y Gran Buenos Aires representaban el 70% del parque industrial del país. Al mismo tiempo, debemos apuntar que los conflictos en la primera zona trascienden con mayor facilidad a la prensa; y a su vez que el sindicalismo en el interior del país ha sido más duramente golpeado tanto por la represión como por la situación económica, dificultando mucho sus posibilidades de acción.

Del total de medidas de fuerza revisadas, 24 ocurrieron en empresas de servicios y 55 de industria. Si bien el número de conflictos en la industria fue superior al de servicios, esta relación tiene otro significado en cuanto al número de trabajadores. Los conflictos en la industria movilizaron a 34.815 obreros y las empresas de servicio a 52.996, es decir al 60% del total. Estos conflictos se dieron con gran empuje en sectores de servicios que tuvieron un carácter dinámico, en el proyecto económico del régimen como la banca, el puerto, marítimos.

Una revisión de las causas de las medidas de fuerza establece que, 35 fueron por salarios, 31 por recesión (dentro de ellas 19 por falta de pago, 7 por despidos, 1 por cierre y 4 por suspensiones), 6 por condiciones de trabajo, 1 por organización sindical, el resto por causas varias.

Esto indica la existencia de dos ejes precisos en los conflictos de una similar importancia: salario y recesión. Los conflictos por condiciones de trabajo tuvieron una importancia gravitante ya que en muchos casos se hicieron contra cambios glo-

bales en el régimen de trabajo, que significaban una pérdida de importantes conquistas y agredían al conjunto de los trabajadores del gremio, tornándose por lo tanto en conflictos de un alto grado de politización. Por ejemplo, tenemos la lucha contra la nueva ley de navegación, la privatización de subterráneos, el desmantelamiento de los ferrocarriles. Por otro lado, la proporción de conflictos por aumento salarial con relación a las industrias y las empresas se corresponde con el papel que éstas juegan dentro del plan económico de Martínez de Hoz. En los conflictos por recesión, hay que verificar dos procesos en el problema de los cierres y despidos; uno es la crisis de la industria, que hace a la reducción de la producción, el otro responde a un proceso de concentración monopólica que no siempre significa una pérdida de la importancia de la industria.

El análisis de las medidas de lucha tomadas en los conflictos analizados arroja los siguientes resultados: 46 fueron paros; 8 retiros de colaboración o trabajo a reglamento; 13 reclamos, estado de alerta, peticiones y/o rechazos; 7 movilizaciones (Borgward, movilización en la calle; Nuñorco, toma pacífica de la planta con apoyo de la población; Deutz, entrevistas públicas y presencia en la Casa Rosada). Los trabajadores de Deutz son los primeros, desde los paros de 1977, que levantaron en forma explícita y pública el pedido de renuncia del Ministro Martínez de Hoz, que trascendió a la prensa. Se equiparaba a su vez la experiencia que estaba realizando contemporáneamente el sindicato "Solidaridad" en Polonia reclamando el apoyo del Vaicano. En el conflicto del Banco de Intercambio Regional (BIR) ocurrieron entrevistas públicas, una misa y presencia en la Casa Rosada; en el del Hospital Provincial de Rosario se realizó una marcha en los jardines del establecimiento; en SASETRU se dio una marcha de hambre en la calle; en el Banco de Tokio los empleados llevaron a cabo una guerra de bombas de olor hechas con el insecticida gammexané.

No existió una forma de lucha única sino que hubo res-

puestas diferenciadas ante cada problema. En los conflictos por aumentos de salarios, las medidas fueron en su mayoría paros con presencia en el lugar de trabajo, que duraron horas y fueron progresivos. Esto demostraría una tendencia a mantener unidos a los compañeros y evitar la dispersión, ya que al no poder utilizar el sindicato como lugar físico de reunión ésta se hizo en la empresa. Ello estaría determinado también por la necesidad de no prolongar en el tiempo los conflictos. En los pedidos de aumentos se buscaron reaseguros que impidieran que el nuevo salario fuera tragado por la inflación; por ejemplo, la indexación del salario, tendiendo en los montos inicialmente reclamados a igualarse con las mejores empresas de cada sector.

En los conflictos por recesión también hay respuestas diferenciales, siendo notable que en los casos de despidos y cierres el enfoque es opuesto al de la situación anterior. En este caso el esfuerzo se dirige a sacar el conflicto a la calle, extenderlo a otras empresas y lograr el apoyo de otros sectores sociales. Hay conflictos por recesión que duraron meses como en el caso de La Bernalesa, Borgward, Deutz, BIR, Productex.

Los conflictos por condiciones de trabajo se dieron en los sectores laborales de mayor nivel organizativo y conciencia como ferroviarios, SMATA y textil del hilado sintético. Es de destacar, por su importancia, el paro nacional marítimo, por su unidad, magnitud y por su alto contenido político de enfrentamiento a una ley de la dictadura que permitía la contratación de personal extranjero en los buques argentinos; cosa que no sólo haría peligrar sus fuentes de trabajo sino también su poder de negociación como entidad gremial y por ende el control sobre las condiciones de trabajo.

En términos de respuesta, diez de los conflictos obtuvieron expresiones de solidaridad pública, tres de éstas fueron activas y una de ellas (caso de ingenio azucarero Nuñorco) sumó a otros sectores sociales.

Existe información sobre la estructura de conducción en 56

casos de los 79 analizados. Los datos disponibles indican lo siguiente: 44 conflictos fueron conducidos por organización de empresa; 10 por comisiones internas; 1 por comisión de despedidos; 1 por coordinadora de agrupaciones. Dentro de los 44 conflictos existieron algunas coordinadoras regionales: 3 de bancarios, 1 de pesca, 1 de transporte, 1 de mecánicos. Otros 5 conflictos fueron conducidos por las seccionales de los respectivos sindicatos. El último fue un paro nacional, conducido por una comisión de lucha que nucleó a los ocho gremios marítimos.

Del alto número —44— de conflictos dirigidos por organismos de empresa, podemos inferir que la recomposición del activismo obrero después de los durísimos golpes recibidos entre 1975 y 1977 tendió al marginamiento de las direcciones jerárquicas sindicales. Un fenómeno nuevo es el surgimiento de conflictos de más de una empresa, extensión que se dio en torno a cada actividad y no sobre el territorio, o sea que la coordinación fue por rama de industria o servicio. Este fue el caso de los conflictos pesqueros en Bahía Blanca, transportes de Córdoba, marítimos, y los bancos de Quilmes y Popular Argentino. Hubo también un proceso de desarrollo y concentración organizativa estable, expresado en el desarrollo de las regionales de la Comisión Unificada de los Trabajadores Argentinos (CUTA) y en la existencia de coordinación en portuarios, ferroviarios, gremios de transporte, estatales.

Aunque la actividad obrera se concentró principalmente en la zona del Gran Buenos Aires y en menor grado en Córdoba y Rosario, a lo largo de 1980 se notó todo un desarrollo muy importante en el interior del país. En este sentido fueron reveladores los paros azucareros de Nuñorco y ferroviario de Talli Viejo en Tucumán; los paros ferroviarios y de transporte en Rosario; las huelgas automotrices en Córdoba; la agitación entre los metalúrgicos de Villa Constitución y las múltiples protestas y medidas de fuerza en otras zonas del país, como por ejemplo Mendoza.

En términos de sectores fueron los ferroviarios, metalúrgicos y automotrices los que esquivaron al frente de la resistencia tanto por la cantidad como por la calidad de las medidas de fuerza. En concreto han sido Renault y Peugeot conjuntamente con los ferroviarios, los que marcaron el paso de las movilizaciones de 1977; y fueron éstos junto con los metalúrgicos los que estuyeron al frente en 1979 y 1980, siendo los afiliados del SMATA y la UOM los protagonistas de casi todas las tomas de fábrica. Es de destacar el peso del sector servicios en la movilización de los trabajadores, particularmente después de 1978. Un sector que también se mostró muy combativo es el de textiles, pero éste fue muy golpeado por la oleada de quiebras y el gran desempleo en la industria, que se erigieron como serios obstáculos a su organización y movilización.

VI

En 1981 la creciente agitación evidenciada en el campo laboral causó que la situación del mismo se tornara en una de las principales preocupaciones del régimen militar, inclusive por encima del problema económico. Durante los meses de junio y julio se sucedieron oleadas de medidas de fuerza y conflictos. Hubo huelgas en Mercedes-Benz y en Perkins Argentina; los metalúrgicos se declararon en estado de alerta; el 4 de agosto los trabajadores ocuparon la metalúrgica Bellusi y el mes anterior había ocurrido lo mismo en Industrias Metalúrgicas de Rosario. Luz y Fuerza realizó una manifestación de cientos de sus afiliados en pos de aumentos salariales⁶¹. Pero los indicadores de la situación del sector obrero fueron los dos paros nacionales del SMATA y el paro general decretado por la CGT el 22 de julio.

Los paros del SMATA fueron realizados como parte de un plan de movilización del gremio en defensa de sus fuentes de trabajo. El desarrollo de los mismos planteó un desafío al régi-

men. Los paros del gremio mecánico fueron acatados casi totalmente en la Capital Federal y en el Gran Buenos Aires, mientras que las seccionales del interior, lideradas por Elpidio Torres de Córdoba, no se adherieron. Al primero de estos, realizados el 17 de junio, el régimen respondió encarcelando a varios dirigentes y a numerosos trabajadores que intentaban realizar una manifestación en la central del gremio en Buenos Aires⁶².

Por otro lado, el paro nacional convocado por la CGT suscitó mayores inquietudes. Sus objetivos fueron "recuperación del aparato productivo y de los niveles de salarios" y "plena vigencia del estado de derecho". Los organizadores invitaron a participar a otros sectores sociales, y recibieron la adhesión de todas las regionales de la CGT, de las seccionales del SMA-TA, la Coordinadora de Taxis, y de cuatro agrupaciones gremiales que se desvincularon de la Unión Ferroviaria, entre otros. La CGT declaró que el paro "no está dirigido contra nadie en particular"⁶³, pero esa declaración conciliadora, dirigida a los sectores gremiales más colaboracionistas y al régimen en particular, no engañó a nadie. En la práctica el paro enjuiciaba todo lo actuado por el régimen militar durante los cinco años anteriores.

El paro general del 22 de julio de 1981 tuvo características similares al de 1979, aunque las cifras de acatamiento fueron mayores. En el Gran Buenos Aires paró la vasta mayoría de los establecimientos industriales con las notables excepciones de la metalúrgica Gurmendi y de Ford General Pacheco, pero no se logró paralizar el ferrocarril Mitre y la respuesta fue sólo parcial en las líneas Roca y Sarmiento. La Plata tuvo 50% de ausentismo; en Córdoba y Rosario se adherieron los gráficos; en Tucumán y Mendoza los ferroviarios; en Bahía Blanca el 60% de los empleados de comercio; en Entre Ríos el SMATA, camioneros y panaderos; en San Juan, vitivinícolas, bancarios y trabajadores de la carne; en Mar del Plata los mecánicos; y en Capital Federal los estibadores y muchos otros. La Policía

Federal informó que un millón y medio de trabajadores habían acatado el llamado de la CGT⁶⁴. También importante fue el hecho de que muchos pequeños y medianos empresarios y comerciantes cerraron sus puertas en apoyo al paro⁶⁵.

El régimen, aunque manifestó repelidas veces que no estaba preocupado por el paro, demostrará en la práctica lo contrario. Surgieron las acostumbradas amenazas de aplicar los distintos decretos antilaborales instituidos desde el golpe militar. A nivel abiertamente represivo, las fuerzas de seguridad se movieron a través de distintas ciudades, deteniendo "para averiguación de antecedentes" a todos los sindicalistas que encontraban, liberándolos horas más tarde. Los dirigentes que integran el secretariado nacional de la CGT fueron arrestados el día del paro⁶⁶.

Es evidente que la situación del obrero seguía empeorando notablemente. Entre enero y julio de 1981, *Clarín* informó que se habían registrado 1.296 juicios por quebranto, o sea un aumento del 129% en valor real sobre los 383 juicios registrados en 1980. Asimismo, informaba que la industria metalúrgica básica exhibía una capacidad ociosa del 64%; papel y cartón de 59,9%; cemento del 44,6%; productos químicos industriales del 26,2%; destilerías petroleras del 26,4%; y fábricas automotores del 37,8%⁶⁷. La situación era tan seria que el obispado de Quilmes organizó una concentración pública que denominó "*Marcha de Hambre*". Los organizadores exhortaron a pedir "*pan y trabajo*" y sollicitaban a los manifestantes a que llevaran "*ropa y alimentos para los necesitados*"⁶⁸.

La Argentina subterránea se volvió a manifestar abiertamente el 7 de noviembre en la marcha por "*Paz, Pan y Trabajo*" a San Cayetano, marcando, además, que la resistencia obrera ya obligaba a otros sectores a pasar a la oposición en forma más activa. La marcha fue organizada por la CGT y contó con el apoyo de algunos partidos políticos. Convocó a más de 50.000 personas y fue correctamente descripta por un cronista como "*marcha de la bronca*"⁶⁹.

Proceso que ha logrado hambrear al pueblo sumiendo a miles de trabajadores en la indignancia y la desesperación"⁷⁴.

La tarde del 30 de marzo la Plaza de Mayo estaba virtualmente cercada por una concentración de patrulleros, carros de asalto, camiones hidrantes, helicópteros y policías a caballo. Los manifestantes no pudieron acceder a la misma, pero se fueron sumando numerosos espectadores indignados por la brutalidad del accionar policial. Los manifestantes dieron vuelta al área de la plaza por varias horas desafiando a las fuerzas represivas. A las 16 horas la policía interceptó en el puente Pueyrredón una gruesa columna de obreros que pretendía cruzar el Riachuelo. También fue reprimida una manifestación en Tribunales y otra de estibadores en el puerto. Frente a la CGT se formó una columna que se puso en marcha hacia la Plaza⁷⁵. Al caer la noche, el centro de la ciudad de Buenos Aires era un pandemonio. La policía castigaba a los manifestantes con salvajismo, con disparos hacia los balcones desde los cuales la gente gritaba contra la represión. Manifestantes y simpatizantes hacían frente a las fuerzas de seguridad y desde los edificios y las esquinas llovía todo tipo de proyectiles. Hubo entre mil y tres mil detenidos, dependiendo de la fuente utilizada.

En casi todas las ciudades del interior se hicieron actos paralelos. En Mendoza, una manifestación similar a la de Buenos Aires fue duramente reprimida, quedando entre los muertos el dirigente de los trabajadores del cemento José Ortiz con una bala en el pecho. En Rosario, dos mil personas recorrieron el centro, a pesar de la fuerte presencia policial. En Tucumán hubo más de 200 detenidos. En Córdoba la ciudad fue ocupada por el III Cuerpo de Ejército que patrullaba las calles con columnas de hasta siete vehículos militares. En Mar del Plata los enfrentamientos con la represión produjeron numerosos heridos⁷⁶.

Al día siguiente, haciendo un balance de la jornada, la CGT afirmaba que el proceso militar "está en desintegración y en desbande y reclama un gobierno de transición cívico-militar

afirmaba que el proceso militar "está en desintegración y en desbande y reclama un gobierno de transición cívico-militar hacia la democracia"⁷⁷. Dijo un sindicalista: "Ayer ha terminado el miedo, el pueblo dijo basta a una dictadura que ha sumido al país en la más tremenda crisis de todos los tiempos"⁷⁸.

El plan de lucha desarrollado por la CGT que culminó en la movilización del 30 de marzo de 1982 frente a la Casa de Gobierno en la Capital Federal marcó claramente que el movimiento obrero había herido al "Proceso". La importancia de esta movilización es que dejó en claro varios aspectos. Primero de todo, que el terror y la represión no alcanzaron para detener la lucha popular. Segundo, y se desprende de lo anterior, que los trabajadores acumularon suficiente fuerza, tanto objetiva como subjetivamente, para retomar la calle una vez más y disputársela a las fuerzas represivas. Tercero, la movilización ejemplificó cómo el movimiento obrero se constituyó en el motor de la resistencia antidictatorial impulsando a otros sectores sociales tanto a la lucha callejera como a medidas de fuerza conjuntas.

Unos días más tarde comienza la tristemente célebre Guerra de las Malvinas. Es indudable que la derrota en la Guerra aceleró la tendencia hacia la apertura. Pero también es indudable que el proceso de resistencia obrera desarrollado a partir de marzo de 1976 y que culminó con la movilización de marzo de 1982 representa la base material de la conquista de la democracia y de la derrota de la dictadura. La resistencia obrera fue una de las causas del deterioro de la dictadura, puesto que impidió el consenso que requería Martínez de Hoz tanto para la aplicación de su plan económico como para poder corregir los "errores" del mismo. A su vez, la "intranquilidad" laboral sirvió de elemento agudizador para las discrepancias tácticas internas en el Proceso. En este sentido, la Guerra de las Malvinas fue el último intento de lograr un consenso para su modelo de país. Su fracaso en la guerra fue el más visible de todos, puesto que evidenció las carencias de los militares en su función espe-

Los manifestantes marcharon desde el estadio de fútbol de Vélez Sarsfield hasta la Iglesia de San Cayetano, patrono del trabajo, coreando consignas contra el régimen y reclamando por los desaparecidos. Se vieron expresiones de furia popular al finalizar la demostración, cuando algunos de los manifestantes se enfrentaron con las fuerzas represivas, arrojando salivas y monedazos a los agentes de policía, o entonando cánticos de neto corte político y hasta partidario. Esta actitud es notable dado el vasto operativo represivo que desplegó el régimen, que incluyó miles de efectivos y hasta el uso de helicópteros⁷⁰.

En otros puntos del país hubo manifestaciones similares. En la ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada se organizaron concentraciones para marchar a la Iglesia de San Cayetano que fue impedida por el despliegue de policías uniformados y de civil. También en Rosario los trabajadores acudieron al llamado en medio de un severo dispositivo de seguridad.

Es necesario consignar la importancia de esta manifestación, porque su desarrollo tomó por sorpresa a los organizadores y al régimen por igual. Tanto las consignas reclamando por los desaparecidos como las de "asesinos, asesinos", o "el pueblo unido jamás será vencido", iban bastante más allá de lo planificado. Esto se evidenció cuando recién después de la marcha, y cediendo ante la evidente presión popular, los cinco partidos políticos nucleados en la Multipartidaria (PJ, UCR, PI, PDC, MID) asumieron el tema de los desaparecidos. Y días más tarde, el vicepresidente primero del Justicialismo, Declinido Bittel, expresó su preocupación por "la indiferencia de los argentinos" ante los políticos "que ya no creen en Dios, ni en la patria ni en sí mismos". La situación era cada vez más incontrolable⁷¹.

Esto último se vio reflejado en varios incidentes a principios de 1982. El primero ocurrió cuando el titular de la Comisión Nacional de Trabajo (CNT), Jorge Triaca, se apersonó a la seccional de gremio plástico de la zona norte del Gran Buenos Aires, y de allí fue expulsado a puñetazos por los obreros

entre grios de "traidor" y "colaboracionista". La prensa informó también que se había formado un movimiento de base en la Unión Ferroviaria, integrado por varias seccionales de ese gremio en Buenos Aires, en rechazo a la dirección del sindicato. A su vez, en una misa celebrada por la reconstituida Confederación General del Trabajo —ex Comisión de los 25— en La Matanza para orar por los desocupados, en defensa de las fuentes de trabajo y por la libertad de los presos políticos y gremiales sin proceso, se dio una confrontación entre los dirigentes y un amplio sector de la base concurrente. Esto ocurrió cuando grupos de participantes empezaron a cantar consignas de corte combativo. Los dirigentes calificaron de "infiltrados comunistas" a los que coreaban los estribillos. La reunión terminó en una gresca en la cual la policía intervino para proteger a los dirigentes gremiales⁷².

El avance en todo este proceso hizo síntesis durante el mes de marzo de 1982. Más de dos mil personas se movilizaron el día 5 frente a la casa de gobierno para reclamar por los desaparecidos; y miles de personas expresaron su descontento frente a la desesperante situación económica. Los estatales se movizaron el 9 de marzo en Buenos Aires en contra de las privatizaciones. El 17, durante un homenaje a Carlos Andrés Pérez, ex presidente de Venezuela, el público comenzó a corear: "¡La sangre derramada no será negociada!" en oposición a la propuesta de establecer un acuerdo entre civiles y militares. El 18, los trabajadores portuarios de Buenos Aires reclamaron ante el Comando en Jefe de la Armada por sus fuentes de trabajo y mejoras salariales, mientras jubilados y pensionados demandaban aumento de haberes en Plaza de Mayo. En la iglesia de San Francisco, a una cuadra de esta misma plaza, más de mil trabajadores estatales arrojaron volantes de repudio al gobierno al concluir una misa en que se rogó por los salarios⁷³.

El 19 de marzo la CGT lanzó el llamado a todos los sectores del país para que convergieran en Plaza de Mayo el día 30. La movilización fue llamada con el fin de "decir basta a este

cífica. Evaluando el momento escribió Juan Villarreal: "Los actores de su limitado consenso quedaron al aire y la crisis de hegemonía de los sectores dominantes se agudizó. Es así que se completó el cuadro de quiebra de las representaciones"¹⁹.

NOTAS

- 1 Ver Daniel James, "Racionalización y respuesta de la clase obrera: contexto y limitaciones de la actividad gremial en la Argentina", en *Desarrollo Económico*, N° 83 (octubre-diciembre 1981), págs. 320-349.
- 2 *Ibid.*, 332.
- 3 *Ibid.*, 331, citando al secretario general de la CGT, Eduardo Yuleich, en 1955.
- 4 *Ibid.*, 333.
- 5 *Denuncia*, agosto, octubre y noviembre 1976.
- 6 Alvaro Abbós, *Las organizaciones sindicales y el poder militar (1976-1983)* (Buenos Aires: CEAL, 1984), pág. 23.
- 7 Agencia de Noticias Clandestina (ANCLA), 23 de octubre de 1976. Citado en Horacio Verbitsky, *Rodolfo Walsh y la prensa clandestina* (Buenos Aires: Ediciones de la Urraca, 1985), pág. 69.
- 8 Para el conflicto de Luz y Fuerza seguimos principalmente el informe que se encuentra en Secretaría de Relaciones Sindicales (S.R.S.) de la Federación Gráfica Bonaerense, *Situación Sindical en la República Argentina* (Mimeo, 24 de marzo de 1978).
- 9 Abbós, *op. cit.*, 24.
- 10 S.R.S. de la F.G.B., *op. cit.*
- 11 *Denuncia*, noviembre 1976.
- 12 Alfredo Sirkis, *A Guerra da Argentina* (Rio de Janeiro: Record, 1982), 196.
- 13 S.R.S. de la F.G.B., *op. cit.*
- 14 *La Opinión*, 3/XI/76.
- 15 Sirkis, *op. cit.*, 197.
- 16 *Ibid.*, 198.
- 17 *Clarín* y *La Opinión* del 29/XI/76.
- 18 *La Opinión*, 3/XI/76.
- 19 S.R.S. de la F.G.B., *op. cit.*
- 20 Abbós, *op. cit.*, 24.
- 21 *La Opinión*, 27/II/77.
- 22 Abbós, *op. cit.*, 25.
- 23 *Ibid.*, 26.
- 24 Santiago Sentén González, *Diez años del sindicalismo argentino* (Buenos Aires: Corregidor, 1984), pág. 72.

- 25 Cables de UPI y AP del 14/II/77; *El Día de México*, 15/II/77 y 17/II/77; *La Opinión*, 13/II/77; *Excelsior de México*, 12/III/77.
- 26 Ver periódicos de la época, en particular *Clarín*.
- 27 *Denuncia*, agosto, octubre y noviembre de 1976, marzo y abril de 1977; S.R.S. de la F.G.B., 35; Sirkis, *op. cit.*, 178-179. *Boletín Internacional de Solidaridad Argentina contra la Represión y la Tortura* (Archivo de Editorial "Denuncia"), julio 1976.
- 28 Sirkis, *op. cit.*, 178-179.
- 29 *Denuncia*, agosto, octubre y noviembre 1976.
- 30 Sirkis, *op. cit.*, 204.
- 31 *Denuncia*, abril 1977.
- 32 "Les grandes grèves de 1977", en *Le Monde Diplomatique* (Abril 1978), pág. 15.
- 33 *Denuncia*, septiembre 1977.
- 34 D. Marcelo, "Desafío obrero a la dictadura militar", en *Perspectiva Mundial* (Nueva York: 21 de noviembre de 1977).
- 35 ver *Clarín* 27, 28, 29, 30/X/77.
- 36 *Denuncia*, diciembre 1977; *Clarín* 17/X/77 al 3/XI/77; *La Prensa* 27/X/77 al 23/XI/77; *La Opinión* 31/X/77 al 9/XI/77; *La Nación* 11/XI/77; *Excelsior de México*, 16/X/77 al 15/XI/77; *Associated Press* y *Agence France Presse*, cables noviembre de 1977; *Liga por los Derechos del Hombre* (Argentina), *Carta*, noviembre 1977.
- 37 Arturo Fernández, *Las prácticas sociales del sindicalismo (1976-1982)* (Buenos Aires: CEAL, 1985), pág. 91-92.
- 38 *Idem*.
- 39 ver *Denuncia* 1977.
- 40 "Les grandes grèves de 1977", en *Le Monde Diplomatique* (Abril 1978); pág. 15.
- 41 ver *supra* (36).
- 42 Abós, *op. cit.*, 36.
- 43 *Ibid.*, 36; ver *supra* (36); Jorge Perrone, *La patria reciente* (Buenos Aires: Ediciones Puer, 1983), pág. 129.
- 44 *Revista Mercado*, octubre 1978. Evidentemente en este caso el término conflicto debe significar cualquier tipo de diferencias entre la patronal y los trabajadores abarcando desde huelgas hasta la mera información de malestar fabril. Sólo aceptando esta interpretación podríamos suponer que las cifras son correctas, dada la disparidad inmensa entre las mismas y el número de medidas reportadas por la
- 45 *Clarín* 16, 17 y 18 de septiembre de 1979.
- 46 *Clarín* 9, 10 de noviembre de 1979.
- 50 Bloque Sindical, *op. cit.*, enero 1980.
- 51 Cálculo basado en *Clarín* y otras publicaciones entre enero y octubre de 1979. Ver también: Gonzalo Chávez, *Las luchas sindicales con el Proceso* (Buenos Aires: Ed. La Causa, 1983). Debemos notar que la mayoría de los conflictos obreros fuera de la zona de Capital Federal y Gran Buenos Aires parecen no haber sido reportados por la prensa a menos que fueran de cierta magnitud.
- 52 Fernández, *op. cit.*, 93.
- 53 Existen varios ejemplos de esto. Los más evidentes son el apoyo obtenido tanto de individuos como de asociaciones de pequeños y medianos empresarios como la Asociación de Empresarios de Rosario (AER) y la Federación Económica de Buenos Aires (FEBA) durante la huelga general de abril de 1979. Ver *Denuncia* (15 de Febrero al 15 de marzo, 1979), págs. 3-4. También ver Pablo Pozzi, "Apuntes sobre la situación del movimiento obrero argentino", en *Denuncia* (agosto 1981). *Latin America Political Report* (LARR), 4 de mayo de 1979, pág. 132.
- 54 LARR, 4 de mayo de 1979, pág. 132.
- 55 Abós, *op. cit.*, 55.
- 56 *Ibid.*, 49.
- 57 Para una excelente discusión sobre el tema de la lucha por el control obrero sobre la producción y sus implicancias ideológicas anti-capitalistas y larvadamente socialistas ver: David Montgomery, "The Past and Future of Workers' Control", en *Radical America* 13

CAPITULO IV
LA CUPULA SINDICAL

- (Noviembre-Diciembre 1979), págs. 7-24. Y también del mismo autor: *Workers' Control in America* (Nueva York: Cambridge University Press, 1979).
- 58 Basado en publicaciones varias, particularmente *Clarín, La Prensa y El Económico*. Además, usamos el excelente trabajo de Gonzalo Chávez, "Movimiento obrero: los conflictos sindicales en 1980" (Mimeo, s/p). Una primera versión de este apareció en Pablo Pozzi, "Apuntes sobre la situación del movimiento obrero argentino", *op. cit.*
- 59 Del total de conflictos y trabajadores afectados, 16 de ellos abarcaron más de un mes. El total del cuadro refleja el número real de medidas de fuerza y trabajadores. De los 87.811 trabajadores que adhirieron a los conflictos, 34.815 eran obreros industriales y 52.996 eran trabajadores de servicios.
- 60 El mes de enero es atípico debido a las vacaciones de verano.
- 61 Ver *Denuncia*, agosto-septiembre de 1981 y *Clarín*, del 3/IV al 5/VIII de 1981.
- 62 *Clarín*, 18/VII/1981.
- 63 *Clarín*, del 15 al 21/VI/1981.
- 64 *Clarín, Unomásuno* de México 23/VII/81.
- 65 Alejandro Dabat and Luis Lorezano, *Argentina. The Malvinas and the End of Military Rule* (London: Verso Editions, 1984), págs. 74.
- 66 *Denuncia*, agosto-septiembre de 1981.
- 67 *Idem*, citando a *Clarín*.
- 68 *Denuncia*, octubre de 1981.
- 69 *Clarín*, 8/XI/1981.
- 70 Ver *Denuncia*, diciembre de 1981.
- 71 *Denuncia*, diciembre de 1981. La Multipartidaria formada por los partidos Justicialista, Unión Cívica Radical, Intransigente, Demócrata Cristiano y Movimiento de Integración y Desarrollo fue conformada a mediados de 1981. Sus objetivos iniciales eran la "reconciliación nacional" y el retorno a la democracia. Ver LARR, 31 de julio de 1981.
- 72 *Denuncia*, marzo de 1982.
- 73 *Clarín*, del 6 al 20/III/1982.
- 74 *Clarín* 27, 28, 29 y 30/III/82 y 1, 2, y 3/IV/82; ver también Abbós, *op. cit.*, 85.
- 75 *Idem*.
- 76 *Clarín*, 1/IV/1982.
- 77 Abbós, *op. cit.*, 87.
- 78 *Denuncia*, abril-mayo de 1982.
- 79 Juan Villarreal, "Los hilos sociales del poder", en Eduardo Jozami *et al*, *Crisis de la dictadura argentina* (Buenos Aires: Siglo XXI Eds., 1985), pág. 211.

La cúpula sindical en la Argentina es una de las instituciones con mayor poder en la sociedad civil; un poder que se basa en su capacidad de convocatoria y movilización y en sus recursos económicos. A su vez los dirigentes sindicales tienen una tendencia a la burocratización. Por un lado suelen ser figuras de prestigio frente a sus compañeros de trabajo y por ello son reelectos permanentemente, y además adquieren competencia técnico-burocrática que les facilita el manejo del aparato sindical. "A medida que se prolonga su permanencia al frente del sindicato el dirigente va alejándose de las pautas culturales e incluso económicas de los trabajadores de la base sindical" con lo que surge una tendencia a autopertuarse en el cargo en defensa del propio status e inclusive se da un alejamiento de su base para adquirir una relativa autonomía y jugar un rol de intermediario entre obrero y patronal¹. En este sentido el corporativismo peronista junto con el verticalismo como forma de selección de los dirigentes agudiza la tendencia hacia la burocratización de la dirigencia sindical marcando un quiebre con la tendencia histórica del movimiento obrero argentino previa a 1946-1947.

lisa" para contraponerla a la "patria metalúrgica" como modelo de país⁶. Por otro lado, la burocracia ya no estaba inspirada por el reformismo movilizador de los dirigentes gremiales de la década del '40; de hecho, durante la Revolución Argentina ha realizado el pasaje histórico de las posiciones del reformismo obrero a las del reformismo burgués, insertándose explícitamente en el sistema del capital⁷.

El proyecto hegemónico del capital monopolista inaugurado el 24 de marzo de 1976 no es el mismo que posee la burocracia sindical, ni siquiera por parte de quienes se autodenominaron "dialoguistas" y colaboraron permanentemente con el Proceso. Sin embargo, la burocracia sindical va a mirar al golpe de estado con buenos ojos, condicionada por su dependencia del Estado, por su aproximación a las Fuerzas Armadas como aliados estratégicos para tratar de reconstruir el bloque de 1946-1955, y conciente de que ha integrado su suerte a la del capitalismo. Aquí es aplicable lo analizado por Portantiero para el período 1966-1973: "Como la ofensiva hegemónica del capital monopolista arriba a su punto más alto, acorazada tras todo el peso del poder militar, importantes sectores de la burocracia sindical, especialmente los ligados a las grandes empresas, partiendo de lo que perciben como 'solidez' casi invulnerable del proyecto neocapitalista, tratan de negociar por su cuenta a fin de obtener el mejor partido posible de la nueva situación⁸".

Pero cuando la clase obrera presiona y plantea su claro rechazo al Proceso, obligando a la burguesía financiera a modificar su proyecto, la burocracia sindical retoma su proyecto original. Ya no se trata de desmovilizar a las masas, sino de la posibilidad de controlar la movilización existente subrayando su autonomía y convirtiéndose en la principal expresión de la oposición. De esta manera la burocracia sindical se convierte lentamente en un factor de resistencia y unidad como forma de defender sus privilegios, garantizar su supervivencia y al mismo tiempo mantener control sobre la base gremial.

A partir de 1955 la burocracia sindical argentina ha debido asumir dos papeles: el de negociadora de las condiciones de venta de la fuerza de trabajo y otro, determinado por la apropiación del peronismo, que transformó a los sindicatos en los principales representantes políticos de la clase trabajadora². Así la dirigencia gremial va a combinar el diálogo profesional con la oposición política.

Hay que agregar que una de las herencias del primer gobierno peronista es el enorme peso del Estado sobre el sindicalismo. El control estatal puede abarcar desde la intervención directa y llana por funcionarios gubernamentales hasta el ahogo económico por el bloqueo de sus fondos. "Todo ello obliga a que la burocracia sindical despliegue siempre una estrategia tendiente a coparticipar del poder"³. En este sentido el proyecto socio-económico que propugna la CGT entre 1960 y 1976 no difiere virtualmente de los reclamos del capital nacional y grupos nacionalistas de las Fuerzas Armadas. En esta política de alianzas la burocracia sindical busca asumir la representación política de las masas peronistas⁴.

"Pero en la medida en que se desarrolla el proceso de acumulación... el conflicto principal de la sociedad pasará a estructurarse en torno al enfrentamiento entre capital y trabajo [...] El nivel que ha alcanzado esta contradicción se expresará en la incapacidad que tiene el sistema para asimilarla y causarla dentro de los canales institucionales. En este contexto, no hay posibilidad de que la clase obrera en su conjunto participe del sistema, por ello una política reformista es condenada al fracaso y a la pérdida de legitimidad entre las bases"⁵. Es por esto que, entre 1969 y 1976, la burocracia sindical se vio amenazada por el amplio movimiento popular que se desarrolló en ese país. La juventud Peronista le disputaba la representación política de las masas peronistas; el clasismo cuestionaba su hegemonía sindical; y surgía la "patria socia-

Es evidente que el análisis debe proceder más allá de explicar las actitudes de la burocracia sindical como una "traición" al movimiento obrero. Si bien la burocracia adquiere autonomía con relación a la base obrera y desarrolla intereses propios, a su vez expresa percepciones y necesidades interpretándolas en beneficio propio. La interrelación entre los dirigentes y sus afiliados demuestra que la clase obrera lucha en ciertos terrenos y dentro de contextos determinados, donde existen posibilidades objetivas de una acción significativa y donde la existencia de clase la lleva a percibir tales posibilidades.

II

Las cúpulas sindicales entraron en un receso en su actividad pública el 24 de marzo de 1976. Varios de sus máximos líderes, como Lorenzo Miguel de la UOM, fueron encarcelados. Otros, como el Secretario General de la CGT, Casildo Hererras, se exiliaron. La CGT y todos los grandes gremios fueron intervenidos. Las 62 Organizaciones, brazo político del sindicalismo peronista, fueron prohibidas. De hecho, el régimen actuó como si el sindicalismo se hubiese terminado.

Por debajo de las apariencias, la burocracia entró en un período de negociación y colaboración con la Junta Militar. Pocas veces en la historia social argentina, la clase obrera sufrió un embate tan sangriento como el desatado entre 1976 y 1983. Hubo "una minoría de sindicalistas cómplices de los crímenes de las fuerzas de seguridad (...) la mayoría de los gremialistas como otros dirigentes sociales de nuestro país, políticos, magistrados, etc.), pecaron por callar, teniendo la posibilidad de denunciar con más valor o de unirse a aquellos que lo hacían"⁹. A esta evaluación le falta agregar el factor central. Entre las Fuerzas Armadas y la burocracia sindical había algo en común: ambas se sentían profundamente amenazadas por las tendencias clasistas y combativas que surgieron en

el sindicalismo durante la década de 1960.

A través de 1976 y 1977 se llevan a cabo una serie de reuniones y diálogos entre dirigentes gremiales y representantes de la Junta Militar, en particular los generales Roberto Viola y Carlos Dalla Teajo. El primero de abril de 1976 se reunieron medio centenar de sindicalistas para esbozar una respuesta gremial al golpe. En un momento en que se descargaba una represión brutal sobre el activismo y la base sindical, la burocracia sostuvo dos posiciones: 1) formar una comisión asesora de la intervención de la CGT con el supuesto fin de condicionar sus decisiones, y 2) crear una comisión de enlace que mantuviese relaciones con el interventor de la CGT¹¹. La diferencia entre ambas posiciones no es de fondo, sino más bien hace a la táctica. La segunda postura, que fue adoptada por la mayoría, tenía la dudosa virtud de no dejar a los sindicalistas completamente abiertamente con el régimen.

Con este criterio se forma una Comisión de los 10, formada por gremios no intervenidos con el propósito declarado de reorganizar las bases y estrategias del sindicalismo. Proponen organizar un plenario nacional señalando que "no se tratará de la formulación de críticas al gobierno... sino de expresar nuestros puntos de vista a manera de colaboración"¹². En junio de 1976, el régimen convocó a los dirigentes de unas cien organizaciones no intervenidas para que eligieran una delegación a la Conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra. Una vez allí, el delegado oficial, Ramón Baldassini (FOECYT), reclamó públicamente el "pronio restablecimiento de las estructuras sindicales"¹³, mientras que privadamente se bloqueaban los esfuerzos por denunciar la política antobrera de la dictadura¹⁴.

Al comenzar 1977 se formó la Comisión de los 7, integrada por Ricardo Pérez (camioneros), Juan Rachini (aguas gasosas), Manuel Diz Rey (viajantes), José Canillo (navales), Ramón Elorza (gastromónicos), Juan Serrano (neumáticos) y Demetrio Lorenzo (alimentación); todos de sindicatos no interve-

nidos¹⁵. Después de diálogos no oficiales, se reunieron públicamente con el Ministro de Trabajo, General Horacio Liendo, al cual se le presentó un documento suscripto por 78 sindicatos en el que se reclamaba:

- 1) la devolución a los trabajadores del poder adquisitivo;
- 2) levantamiento de la supresión de las actividades sindicales;
- 3) normalización de la CGT y los sindicatos intervenidos;
- 4) derogación de la Ley 21.476 de prescindibilidad;
- 5) libertad a los presos gremiales sin causa, definición de la situación de quienes estén sometidos a la Justicia, y publicación de la lista de detenidos y el lugar en que se encuentran¹⁶.

Se incluía, además, una crítica a la política económica. El documento fue rechazado por el Ministro, lo que generó una disputa entre los gremialistas en torno a si debía darse a publicidad o no. Una versión plantea que la mayoría se definió por darlo a publicidad; pero otra sugiere que mientras se discutía, el documento se "filtró" como trascendido realizando así un hecho consumado.

La publicación del documento generó considerable malestar en el gobierno planteando que "se había interpretado mal una política de diálogo"¹⁷. De acuerdo con el régimen se manifestaron los llamados "32 gremios democráticos" que declararon: "No podrá superarse ni se afrontará la lucha a fondo contra la corrosión moral ejercida por el totalitarismo mientras se tenga intacta la estructura vertical del movimiento sindical y se pacie con delincuentes", acusando a los "jefes de la CGT" de haber sido "cómplices y autores directos de corruptelas, negociados, crímenes y del saqueo generalizado del país..."¹⁸

Así, la publicación del documento y su distribución, si bien sumamente limitada y de un contenido escasamente combativo, pone de manifiesto que existen contradicciones en el seno de la cúpula sindical que aún no son nítidas pero que se irán perfilando cada vez con mayor claridad, y que son el resultado

de la cada vez más evidente política del régimen para reestructurar el sindicalismo argentino. Se irán mezclando los permanentes esfuerzos de la cúpula para dialogar, cooperar y colaborar con la dictadura junto con críticas a la política económica y resistencia al proyecto de desarticulación sindical. Los dirigentes gremiales se encuentran presionados constantemente por el régimen, que quiere avanzar en la aplicación de su proyecto, y por las bases que se resisten a perder sus conquistas. Es en este contexto que la dictadura secuestra a dirigentes como Oscar Smith, que integra la Comisión de los 10, cuyos afiliados de Luz y Fuerza de Capital Federal protagonizan largos conflictos en 1976 y 1977.

III

El primero de marzo de 1977 se formó la Comisión de los 25, integrada por sindicatos medianos en su mayoría, y en cuya mesa participaban: aguas gaseosas, alimentación, estatales, telegrafistas, conductores navales, camioneros, telepostales, papeleros, gastronómicos, Luz y Fuerza, mineros, mecánicos, telefónicos y viajantes¹⁹. El objetivo de la Comisión era organizarse en forma permanente para poder así negociar con la dictadura en forma orgánica mejorando a su favor la correlación de fuerzas.

A principios de 1978, los "25" estaban integrados por las siguientes líneas:

- 1) verticalistas: Roberto García (taxistas), José Casullo (navales) y Roberto Digón (tabaco);
- 2) ortodoxos: Carlos Cabrera (mineros), Ricardo Pérez (camioneros), Abdala Baruch (UOM), Rubén Di Caprio (SMA-TA);
- 3) independientes: Ramón Baldassini (FOECYT), Juan Horvath (ATE), Demetrio Lorenzo (alimentación), Alberto Serano (neumáticos);

4) participacionistas: Enrique Micó (vestido), Saúl Ubaldi (cerveteros);

5) antiverticalistas o Grupo de los 8: Fernando Donaires (papeleros).

La integración de las distintas líneas no era estática, puesto que los dirigentes pasaban de uno a otro sector de acuerdo con la coyuntura y las alianzas²⁰.

Gracias a la oleada de conflictos a fines de 1977 la dirigencia sindical obtuvo un nuevo margen de manobra frente a la Junta Militar. Si bien el régimen continuaba sus esfuerzos por crear un sindicalismo colaboracionista, sobre la base de debilitar lo que caracterizaba como "el *corrupto poder sindical*"²¹ balse del peronismo²², por otro lado reconocía la utilidad de la burocracia para frenar luchas obreras que a mediano plazo podían descontrolarse. Es así que a fines de noviembre y durante diciembre de 1977 los diarios levantaron el fantasma del "Cor-dobazo" como eventual continuación de las medidas de fuerza de esos meses²².

Un resultado concreto de las huelgas de noviembre de 1977 fue la agudización de las contradicciones en el seno de la cúpula sindical en cuanto a la táctica a seguir frente al Proceso. Todos eran conscientes de que los conflictos no se habían dado dentro del marco de las estructuras orgánicas. Esta es la base material que genera las diferencias que llevan a la conformación de la Comisión de Gesuón y Trabajo (CG y T) como escisión de la Comisión de los 25. En la nueva agrupación coinciden Francisco de Bernardo (Luz y Fuerza de Santa Fe), Jorge Triacca (plásticos), Desiderio Puga (mercaderías), Juan Perrone (FOETRA), Otilio Calace (calzado), Luis Pécora (construcción), Carlos Roldanes (ACA), Rafael Valle (químicos), Atilio Masciolta, Carlos Colomina y José Alex (Unión Ferroviaria), Luis Guerrero y Lisandro Zapata (UOM), Delfor Giménez (textiles), José Lezcano (Luz y Fuerza de Capital Federal). La CG y T recibió, en ese momento, la adhesión de la Juventud Sindical Peronista²³.

Ambos agrupamientos, "25" y CG y T, expresaban diferencias en el seno de la cúpula que hacían a la táctica frente al régimen y frente a la base, y al análisis que realizaban sobre el futuro del poder sindical. Un sector, identificado con los "25", mantenía la tesis del sindicalismo político, entendiendo que el poder sindical —en particular su representatividad ante la base— está íntimamente vinculado al peronismo. El otro sector —fundamentalmente la CG y T— planteaba que se abra una nueva etapa con el golpe militar y vinculaba la problemática actual de la burocracia a su participación en el último gobierno peronista; así propone un sindicalismo "apolítico", profesional.

Esto lleva a los dos sectores a tomar posiciones distintas frente al régimen, sin llegar a ser combativo o confrontacionista, buscando recrear su fuente de poder en alianza con los políticos justicialistas, con militares nacionalistas y con la Iglesia. Mientras que el segundo optará por una mayor colaboración con el régimen, entendiendo que la situación nacional ha cambiado y que su fuerza residirá en el reacondicionamiento al nuevo Estado gestado por el Proceso. Las posiciones se delinearán con claridad en las declaraciones de ambos nucleamientos en torno al primero de mayo de 1978. En esa ocasión los "25" reiteran su *firme postura adoptada en pos de las legítimas reivindicaciones obreras, la plena ocupación, la inmediata derogación de la ley de alquileres, la libertad de los compañeros trabajadores detenidos, la normalización de los gremios intervenidos, plena actividad sindical y la vigencia de la ley de convenios colectivos de trabajo*. Mientras que la CG y T, por su parte, expresó que "el Día Mundial del Trabajo constituye hoy un desafío a realizar y a partir de esa perspectiva propone la necesidad de enfrentar los numerosos problemas del movimiento obrero argentino desde un ángulo profesional"²⁴. Nótese que en ambos casos se intenta mantener el diálogo con el régimen. Esto es así ya que los dirigentes respectivos están formados en una escuela en la cual las mejoras para los trabajadores y el poder sindical se obtienen mediante el diálogo y la ne-

apreciación reconociendo a los "25" como representantes del movimiento obrero argentino y acusando al régimen de demantelar un sindicalismo poderoso "dejando a sus filas completamente abiertas para una dominación totalitaria". En ese sentido, aclaró la delegación de sindicalistas norteamericanos, "la amenaza principal que enfrenta el movimiento obrero argentino en este momento es la institucionalización y consolidación de un régimen corporativista o fascista bajo un dominio militar o cívico-militar"²⁷.

En cambio, para la CG y T el sindicalismo peronista no sólo ha sido incapaz de detener la "subversión" sino que hasta ha servido de canal de penetración. Este punto de vista lo sintetiza el periodista Roberto García que escribe:

"[...] Estas situaciones que posibilitaron la infiltración se podrían clasificar, quizás groseramente, del siguiente modo:

'a) El movimiento obrero apoyaba una administración que progresivamente fue declinando y que reveló, en el plano económico, en su última etapa un ineludible descontrol. Este hecho, factor de inseguridad, desestabilizó los proyectos gremiales, minó su propia creencia en el rol que debía ejercer el movimiento obrero y, por lógica consecuencia, abrió las compuertas al jubileo febril [...]

"d) La continuada crisis política, ya promediando la gestión justicialista, fue también factor de tremenda importancia no solamente para facilitar la acción disolvente, sino sobre todo para neutralizar la propia estrategia sindical, que se debatía con los poderes del Estado y con los del partido que respaldaba, generando de ese modo un cuestionamiento interno, una inercia estéril. [...] Todo fue tendiendo hacia la destrucción de un movimiento que hasta ese momento había sido barrera del marxismo [...]

"e) La participación de los principales líderes gremiales en cuestiones relativas al Estado [...] significó, además, un natural distanciamiento con lo que tradicionalmente se llaman las bases, agitados por el activismo."²⁸

gociación con el Ministerio de Trabajo y no mediante la lucha sindical. Así, harán lo imposible por mantener el "contacto" con la dictadura utilizando las medidas de fuerza (o las amenazas de medidas de fuerza) como elemento de presión para ampliar su propio espacio.

En este sentido podemos decir que ambos sectores toman una actitud de participación en el Proceso, pero la diferencia de perspectivas hace a la Comisión de los "25" más permeable a la presión de base puesto que estará más dispuesta a participar abiertamente en política, utilizando la movilización como acumulación de fuerza propia. Sólo así podemos entender cómo, después de dos años y medio de dictadura, el 21 de diciembre de 1978, en una celebración de fin de año, con la participación y apoyo del representante de la AFL-CIO norteamericana Tony Friedman, los "25" dan lectura a un documento que califica de "francamente suicida" a la filosofía económica gubernamental. "[...] Por lo que se hace indispensable volver a poner en práctica una filosofía de concertación" señalando que "sólo mediante un gobierno elegido por el pueblo" se alcanzará "la tan ansiada unidad nacional" y sosteniendo que el sindicalismo "debe ahora lanzarse a una obligatoria participación política" lo que excluye "actitudes profesionalistas superadas por la historia"²⁵.

Otro aspecto que diferencia a los sectores es la lectura del pasado sindical frente a la "subversión". Para los "25" el sindicalismo peronista es el principal baluarte contra la penetración marxista de los sindicatos, por eso en la Argentina no existe una central obrera comunista, a diferencia de otros países latinoamericanos. Expresarán en el documento firmado por 78 gremios en enero de 1977: "Una vez más, el Sindicalismo Argentino demuestra que por su doctrina nacional y por la solidez de sus organizaciones, es la verdadera valla a los intentos de infiltración de concepciones ajenas al ser nacional"²⁶.

Una delegación de la central norteamericana, AFL-CIO, en su visita a la Argentina a fines de 1977 concordó con esta

Las diferencias entre los sectores quedaron aún más nítidamente marcadas cuando, a mediados de 1978, la Comisión de los 25 avanza en su proyecto de sindicalismo político dando forma al Movimiento Sindical Peronista (MSP). Esta reedición de las 62 Organizaciones contó con la adhesión de Lorenzo Miguel de la UOM, que en ese momento estaba bajo arresto domiciliario. Inmediatamente el régimen declaró ilegal al MSP y en octubre encarceló brevemente a 35 sindicalistas pertenecientes a los "25".

A pesar de las diferencias internas del sindicalismo, de la presión de las bases y de la postura opositora que iban asumiendo los "25", la relación entre la dictadura y las cúpulas gremiales era buena, sin diferenciación de sectores. Dijo el Ministro de Trabajo, general Horacio Liendo, el 15 de mayo de 1978: *"nuestra relación con los dirigentes sindicales es fluida, fácil y perfectamente entendible."*²⁹

A pesar de la ilegalidad el MSP siguió funcionando con el efecto de agudizar las contradicciones en el seno de los "25". Tanto los sindicalistas no peronistas (Baldassini y Luis Etchezar de La Fraternidad ferroviaria) como los verticalistas disidentes (Diz Rey y Armando Cavallieri de comercio) se resistían a acelerar el proceso de politizar la situación. Así, en junio de 1978 el sector "verticalistas disidentes" se aleja de los "25" y en agosto se une a la CG y T para formar la Comisión Nacional de Trabajo (CNT)³⁰.

A fines de 1978 el panorama sindical queda conformado, por un lado, por la CNT que reúne a "verticalistas disidentes" (26 gremios peronistas) y a los gremios metalúrgico, textil, de sanidad, telefónicos y otros que provienen de la CG y T. Por otro lado, en los "25" se mantienen los "verticalistas", peronistas tradicionales liderados por el taxista Roberto García; los "ortodoxos" (ex "combativos") liderados por Carlos Cabrera y Roberto Digón que junto con los anteriores forman el MSP; el "Grupo de los 8", de pasado vandonista, antiverticalistas y liga-

dos al ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, el metalúrgico Victorio Calabró; y los "participacionistas" de fácil diálogo con el régimen. Al margen de los dos nucleamientos quedan los "independientes", que se separan de los "25" en septiembre de 1978, y los "no alineados". Son los "independientes" liderados por el radical Echezar de la Fraternidad, los que toman una posición más abiertamente colaboracionista. A su vez dirigentes individuales rompen con su sector para integrarse a la CNT, como hicieron el "participacionista" Hugo Barrionuevo (fideeros) y el "independiente" Ramón Baldassini (FOECYT)³¹.

Aquí es importante remarcar que las distintas divisiones de la burocracia sindical y su nucleamiento en distintos organismos responde no sólo a las diferencias tácticas, sino también a pugnas internas entre dirigentes de un mismo gremio, y a una política muy hábil del Ministerio de Trabajo el cual intenta romper la unidad gremial por todos los medios como forma de debilitar el movimiento obrero organizado. Subyacente a todo esto, se producen una serie de negociaciones y diálogos de características verdaderamente bizantinas. No sólo el régimen busca la división del sindicalismo, sino que los dirigentes gremiales aprovechan las diferencias tácticas entre los militares para ampliar su espacio político. Así se reúnen no sólo con los generales Liendo y Viola, sino también con el almirante Emilio Massera, integrante de la Junta Militar y Comandante en Jefe de la Armada, y con el general Diego Urriarte, el cual desde Fabricaciones Militares tiene discrepancias con el Ministro de Economía que pretende privatizar algunas dependencias³². Duró el dirigente de Luz y Fuerza Juan José Taccone en 1978, que el almirante Massera se convirtió en "punta de lanza" para la politización del Proceso, pero —agregó— "hablando con toda claridad, esto no quiere decir que Massera cuente con el apoyo del movimiento popular como candidato". Y tres años más tarde, en 1981, el entorno gremial de Lorenzo Miguel se vio obligado a desmentir reiteradas versiones

que vinculaban al caudillo de la UOM con el "politicado" almirante³³.

IV

Poco a poco, la burocracia va ganando terreno frente al régimen. Pero al mismo tiempo, ésta siente una gran presión de la base para que los dirigentes se unan en defensa de las conquistas sindicales. Por ejemplo, en diciembre de 1978, la Comisión de los 12, representando al sindicalismo mendocino, declaró que esperaba que tanto la CNT como los "25" vayan "construyendo las instancias orgánicas que expresan la unidad profunda de los trabajadores argentinos" que desemboque "en una CGT unida, fuerte, solidaria y representativa". Esto fue seguido casi inmediatamente por un llamado de la Juventud Sindical Peronista a que "reflexionen y se den cuenta del daño que le ocasionan al movimiento obrero (...) que, a causa de sus disputas personales han dividido". Se agregaron también a estos llamados 28 gremios de San Juan, el gremio mercantil y las seccionales de una docena de sindicatos de la zona norte de Buenos Aires³⁴. Será el verticalista Ricardo Pérez, de camioneros, el que expresará mejor esta presión declarando a la revista Confirmado: "Al movimiento sindical y a los dirigentes ya no se les puede pedir más. Lo han dado todo a pesar de que hace ya tiempo se los 'apreió' con intervenciones, limitación de leyes laborales y el impedimento de celebrar las convenciones colectivas de trabajo para lograr salarios justos. Ya no se puede seguir comprimiendo hacia abajo; podrían producirse reacciones incontrolables y se nos echaría injustamente la culpa. Hay que tener en cuenta que los trabajadores suponen que somos complacientes. El riesgo es que aparezcan otros dirigentes menos pacientes. ¿Hasta cuándo hemos de esperar?"³⁵.

Ambos nucleamientos insistían en el diálogo con el régi-

men. A principios de 1979 la CNT levantaba una vez más su pedido de mejoras salariales ante el interventor de la CGT. En distintas ocasiones los "25" y la CNT se reunieron con el subsecretario de Trabajo, coronel Américo Daher, con el almirante Lambruschini, entonces Comandante en Jefe de la Armada, con el vicealmirante Fracassi, con el brigadier Lami Dozo, y muchos otros. Aunque nunca recibieron una respuesta satisfactoria, y a pesar de que el régimen está tratando la nueva ley de Asociaciones Profesionales, ambos, sindicalistas y gobierno insisten que "de ninguna manera se ha interrumpido el diálogo"³⁶.

Ante los magros resultados y la presión de las bases, a fines de marzo de 1979, representantes de la CNT y los "25" lograron un "acuerdo programático": defensa del salario, de las obras sociales, libertad sindical, oposición a la modificación de aportes previsionales, libertad de detenidos y defensa de la economía e industria nacionales³⁷. En base a esto los "25" avanzaron llamando a la "unidad en la acción" colocando a la CNT ante la disyuntiva de seguir el liderazgo del otro nucleamiento o de hacerse responsables por el rompimiento de la unidad gremial.

En este contexto se lanzó la Jornada de Protesta Nacional del 27 de abril de 1979; según un comunicado se "convoca a todos los sectores nacionales a realizar una protesta nacional" en demanda de la "restitución del poder adquisitivo del salario y plena vigencia de la ley 14.250 de convenciones colectivas de trabajo, en oposición a la reforma de las leyes de Asociaciones Profesionales y de Obras Sociales" y en favor "de la normalización sindical". Aunque los "25" llamaron al paro como una maniobra política destinada a apoyar su propia proyección en competencia con la CNT y no como factor de organización y lucha del movimiento obrero, la medida se basaba en necesidades reales y en un contexto de endurecimiento de los sectores más opositores de la burocracia sindical. Estos

capilarizaron la situación presentándose así como una conducción más combativa que la CNT, y resaltando las exigencias de la base.

La reacción oficial a la medida fue enérgica. Seis dirigentes de los "25" fueron encarcelados durante dos meses. El Ministerio de Trabajo calificó la medida como una "decisión irrepensable". Y el Gobierno declaró ilegal el paro, anunciando que garantizará "por todos sus medios y con la fuerza que surge de la razón y la ley, la libertad de trabajo y el orden público".

A su vez, la CNT había decidido no compartir la medida, y emitió una declaración en la que expresaba que el paro dispuesto estaba inhabilitado por haber sido adoptado en forma unilateral y con la pretensión de utilizar a los trabajadores para dirimir supremacías de sectores. La realidad era que, temerosos de cortar el diálogo con la dictadura, los dirigentes de la CNT quedaron desubicados frente a las bases que reclamaban a gritos medidas más efectivas para frenar el deterioro de su situación³⁸.

A partir del 27 de abril de 1979 fueron los "25" los que lanzaron la bandera de la oposición sindical al régimen, arrojándose la representación de las bases y la herencia histórica de las luchas obreras. En este sentido la CNT se presentará como el sector "moderado" en relación de los "divos" de los "25". Una vez más resaltamos que la composición de ambos nucleamientos es cambiante debido al flujo y reflujo de las alianzas y las estrategias de cada gremialista.

La mayor fuerza política y social que han acumulado los "25" como resultado de la Jornada, junto con la inminente aprobación de la nueva Ley de Asociaciones Profesionales, y la disposición del Ministerio de Trabajo de declarar la caducidad de los mandatos de varios dirigentes sindicales, dieron un renovado impulso a los contactos en pos de la unidad sindical. Después de varios intentos fallidos, las negociaciones desembocaron, en septiembre de 1979, en la conformación de la

Conducción Unica de los Trabajadores Argentinos (CUTA) que une a los "25" con la CNT. Fuera de la CUTA quedaron los "no alineados", los "antiverdicalistas disidentes" y los "8", que se unieron para formar la Comisión de los "20", de escaso peso en el panorama gremial a pesar de la simpatía que parecía dispensarle el Ministerio de Trabajo³⁹.

La fuerza política de los "25" dentro de la CUTA se destaca aún más al hacerse públicos los contactos y la relación con la dirección del Justicialismo y a nivel internacional. Particularmente a partir de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA en octubre de 1979, es evidente que varios sindicalistas han tomado abiertamente la posición de "asesores" de políticos peronistas como Deolindo Bittel y Eloy Carnus⁴⁰.

Esta fuerza del sector "político" de la burocracia empujó al sector "apolítico" hacia posiciones más decididas respecto del régimen. Es así como el documento "A los trabajadores argentinos", que puede ser considerado como el programa de acción de la CUTA, juntaba las demandas ya clásicas del sector con demandas políticas, pidiendo: normalización sindical y libertad a los dirigentes detenidos, defensa de la ley de Obras Sociales y de la Ley de Asociaciones Profesionales vigentes durante el gobierno anterior, vigencia de la Ley de Convenciones Colectivas o de "paritarias", vigencia de la Constitución Nacional y un reclamo por los dirigentes y activistas desaparecidos⁴¹.

Y

En noviembre de 1979 se aprobó la nueva Ley de Asociaciones Profesionales que establecía la reorganización del sindicalismo argentino. La Ley atacaba la estructura gremial (eliminaba las estructuras de tercer grado y limitaba las de segundo), atacaba el carácter político del sindicalismo y a la burocracia

al establecer que nadie con antecedentes penales podía ser dirigente sindical.

A pesar de los insistentes rumores sobre un paro general, la reacción de la cúpula sindical no llegó a tanto. En cambio la CUTA optó por "*un plan de acción*" que no confrontase directamente al régimen mientras trataba de imputar la Ley. Así inició una acción judicial por violación al derecho de asociación garantizado por la Constitución Nacional. A su vez el Sindicato Único de Petroleros del Estado (SUPE) inició la primera acción de amparo para declarar inconstitucional la Ley. También se entró en contacto con distintos organismos sociales y partidos políticos en busca de apoyo. Se hizo un llamado a la OIT para que se pronunciase sobre el problema de la eliminación de uno de sus afiliados más importantes: la CGT argentina que agrupa a millones de trabajadores. Se movilizó a la base con peticiones y asambleas en contra de la Ley⁴². Y los sindicatos tomaron la actitud de no acatarla "*ratificando las estructuras existentes*" y pidiendo al Ministerio de Trabajo que las reconozca.

La situación agudizó las contradicciones en el seno de la CUTA. El sector "apolítico" planteó un cambio de estrategia para ajustarse a la nueva Ley que prohibía la participación política sindical. El argumento principal de este sector era que había que adaptarse para preservar la organización sindical y lograr la normalización gremial, cosa que el régimen no permitiría de otra forma. En cambio, el sector liderado fundamentalmente por el MSP impulsaba una línea de confrontación a la Ley como forma de acumular fuerza ante el régimen. El resultado de estos diferendos fue que la CUTA impulsó el "plan de acción" con muchas vacilaciones, y en algunos casos concretos (como por ejemplo en un esfuerzo por llamar a una reunión multiseccional en contra de la Ley) no hubo colaboración por parte de los "apolíticos". Toda esta actividad presentó un obstáculo fundamental al régimen, el cual avanzó muy lentamente en la reestructuración de manera que en diciembre de 1980 se

había aprobado la zona de actuación de sólo unos 350 gremios de más de 2.000 solicitantes⁴³.

En torno a los diferendos tácticos de la CUTA se movían las presiones del sindicalismo medio, que bogaba por un "plan de acción" más combativo. De hecho, distintas delegaciones gremiales del interior reclamaban un plan de lucha "*aún cuando resulte imposible la realización de un plenario sindical para su discusión y aprobación*". La CNT rechazó la participación de las delegaciones regionales en las decisiones de la CUTA sobre la Ley por "*considerarlas poco permeables a las suavidades políticas*".⁴⁴

Por otro lado, la dictadura se movió hábilmente para tratar de dividir una vez más al sindicalismo. Así, ratificó las estructuras nacionales de ATE, UOCRA y la Unión Ferroviaria. El Ministerio de Trabajo, general Llamil Reston (que sucedió a Liendo en el cargo en febrero de 1979), insistió en el mes de abril de 1980, que la nueva Ley "*desconoce entidades de tercer grado pero no las prohíbe*" y que éstas "*pueden llegar a constituirse y hasta obtener personería*". Agregó que "*las convenciones colectivas de trabajo se reimplantarán tan pronto se tenga todo el espectro gremial reestructurado*".⁴⁵ Sin ofrecer nada en concreto, el régimen daba pie para que la burocracia pensara que dialogando podía recuperar los sindicatos.

La presión de la base y el accionar del régimen contribuyeron a que las posiciones en el seno de la CUTA se endurecieran y llevasen a que una vez más se rompiera la unidad sindical. En mayo se volvieron a conformar los "25" y la CNT, mientras que los "20" —prácticamente marginados de la escena gremial durante ocho meses— fueron reinsertados en el panorama, con apoyo del Ministerio de Trabajo, al formar alianza con la CNT. Superficialmente la nueva división había ocurrido en torno a diferentes criterios sobre la delegación sindical a ser enviada a la OIT ese año (1980); los "25" decidieron no integrar la delegación oficial, mientras la CNT sí lo hizo⁴⁶.

Al mismo tiempo se produjo la liberación de Lorenzo Mi-

guel, Secretario General de la poderosa Unión Obrera Metalúrgica y titular de las prohibidas 62 Organizaciones. Encuadrado dentro de los "25", el caudillo metalúrgico aceleraba la actividad política de éstos, puesto que Miguel, dirían los diarios, integraría un tripode peronista junto con Bittel e Isabel Perón. A su vez, el dirigente de las "62" aconseja deponer actitudes intransigentes en aras de la unidad sindical, del diálogo y de la negociación. Incluso la liberación de Miguel desató una lucha feroz en el seno de la UOM con Luis Guerrero, que dirigía el gremio en ausencia de Miguel y que se encuadraba en la CNT. Es indudable que la liberación del metalúrgico obedecía más que nada a las maniobras del régimen, ya que aportaría a aislar a los sectores más combalvos del justicialismo reforzando a los sectores peronistas "potables" (de los "buenos" diría el general Viola en un discurso de marzo de 1981)⁴⁷.

La división de la CUTA fue duramente castigada por los distintos organismos sindicales intermedios. El Movimiento Nacional de Unidad Automotriz 22 de Mayo declaró que "*el fracaso de la unidad de la dirigencia sindical será severamente juzgado por los trabajadores como una traición a sus intereses permanentes*". La Coalición del Sindicalismo Nacional formó un llamado a la reflexión de la conducción gremial, deslacando el valor de la unidad. Y distintas regionales de la di-suela CUTA acusaron a los dirigentes nacionales de estar con-fábulados con los interventores y lanzaron un llamamiento a los dirigentes gremiales "*aún a aquellos que inconcientemente hayan vendido sus conciencias, para que juntos, con des-prendimiento y grandeza, conformemos la verdadera unidad*"⁴⁸. Lo más notable de todos estos pronunciamientos es que rara vez diferenciaban entre los sectores en los cuales estaban encuadrados los dirigentes.

Mientras tanto el régimen avanzaba en sus esfuerzos por debilitar al sindicalismo argentino. El 8 de agosto de 1980 se aprobó la nueva Ley de Obras Sociales atacando el poder económico de los sindicatos. Al mismo tiempo se aprobaron dis-

tas reformas que incluyen el Estatuto del Trabajador Rural, el del Periodista, los regímenes de los trabajadores de comercio, viajantes y seguros, el convenio de Luz y Fuerza, y otros. La dirigencia sindical amenazó con "*hacer uso de fuerza colectiva*" y recurrir al ámbito internacional en oposición a la nueva legislación. Pero se encontró ante una disyuntiva: ¿cómo preservar su poder sindical, controlar a la base y no romper el diálogo con la dictadura?

La respuesta de la CNT y los "20" a esta situación estuvo de acuerdo a su práctica anterior. El 27 de agosto fueron a dialogar con el Ministro del Interior, general Albano Harguindeguy, los dirigentes Mario Cala Gómez (mercantiles), José Yázu (seguros), Juan Racchini (aguas gaseosas) y Luis Etchezar (La Fraternidad). Dos meses más tarde se repitió la ronda pero esta vez con Jorge Triacca (plásticos), Rubén Marcos (UOM), Enrique Venturini (electricistas navales) y Ramón Baldassini (FOECYT). El diálogo marcó un quiebre con la dirigencia política del justicialismo, porque si bien Triacca, líder de la CNT, pidió autorización para asistir al diálogo, dejó bien en claro que lo haría aún sin ella. Bittel, vicepresidente primero del justicialismo, calificó el hecho como "*una grave inconducta*"⁴⁹.

Por otro lado los "25", ante la urgencia que les imponían las acciones de las bases sindicales, decidieron el replantamiento de la sigla CGT. Razonaron que en la CGT convergen dos cosas. Primero, el interés fundamental del movimiento obrero argentino en mantener lo que es una conquista de largos años de lucha: la central única. Y segundo, el hecho de que a través de una CGT controlada por la burocracia, ésta puede —e históricamente lo ha hecho— controlar a la base.

La reconstrucción de la CGT, el 24 de noviembre de 1980, a pesar de la oposición de la CNT y los "20", fue bien recibida a nivel nacional. Expresaba una necesidad organizativa, una reivindicación histórica, y una realidad a nivel de las bases del movimiento obrero que, como dijo Lorenzo Miguel "*nunca estuvo desunido*"⁵⁰. Rápidamente se formaron regionales en

muchas provincias; y la CGT ganó suficiente fuerza para que en marzo de 1981 sus dirigentes plantearan que no "reconocían a ningún otro nucleamiento sindical" y que tratarían con los gremios individualmente. De hecho desconocían a la CNT y a los "20". Además, se agregó la declaración por parte de los "25" de que "se abre un período de lucha más política", y anunciaron que formarían otra vez las 62 Organizaciones "como reaseguro ideológico del accionar del Movimiento Obrero Argentino", recomponiendo así el brazo específicamente político del sindicalismo peronista⁵¹.

De esta manera, a principios de 1981, el sindicalismo argentino se dividía en dos grandes sectores. El primero, formado por la mayoría de las organizaciones nucleadas en la CNT y los "20", dirigidas por Triacca y Rubén Marcos. Este sector ponía el acento en "mantener la fortaleza de las estructuras sindicales como reaseguro de la participación obrera en el debate de los grandes problemas del país", y para esto consideraban imprescindible mantener abiertos los canales de diálogo con el régimen. Su objetivo fundamental era influenciar directamente el proceso de normalización sindical para así retener el control de sus gremios. Su posición la resumió Triacca, el 8 de enero de 1981, al proponer una participación político-militar-sindical en el Proceso⁵².

En contraposición se encontraba la CGT, liderada por Saúl Ubaldini, cervecero en ese entonces identificado con la línea verticalista de los "25". Esta nucleaba una heterogénea multitud de tendencias incluyendo a los "25", al MSP, a la mayoría de las delegaciones del interior del país de la disuelta CUTA, a Lorenzo Miguel de la UOM y a Fernando Donaires de los "20"; todos ellos con el apoyo del Partido Justicialista.

La división distaba mucho de ser nítida puesto que dentro de los mismos gremios se daban serias divisiones. Por ejemplo, en la UOM se encontraba Lorenzo Miguel apoyado por 39 seccionales por un lado, y Luis Guerrero que se adjudicaba 34, por otro. En SMATA estaba José Rodríguez con 19 secciona-

les, en la CGT, y la dupla Rubén Cardozo-Elpidio Torres con 33 seccionales en la CNT. Lo mismo en la UOCRA donde Rogelio Papagno tenía el apoyo de 7 seccionales y Rubén Gaziano-Segundo Palma el de 57⁵³.

Ni la CNT ni los "20" se quedan atrás, a pesar de haber sido descolocados por los "25". A principios de 1981 ambos nucleamientos forman una "Intersectorial" con el objeto de llegar a constituir una CGT "auténtica y representativa". Al igual que sus pares de la CGT, el nuevo organismo se lanza a la actividad política convocando una concertación entre todas las instituciones políticas, económicas y sociales del país a fin de elaborar "un proyecto nacional con la participación y la presencia de todos los componentes de nuestra sociedad pluralista".

VI

Afirmados los "25" y sus aliados, presionados por la cada vez más angustiosa situación económica que vive el país, y ratificados en su estrategia por su perceptible fortalecimiento con relación a la CNT, éstos se lanzaron de lleno a la oposición. La segunda jornada de Protesta Nacional, realizada el 22 de julio de 1981, tuvo un éxito apreciable a pesar de la no adhesión de la Intersectorial CNT-"20". Tanto la Jornada como todo el accionar previo a la movilización del 30 de marzo de 1982 confirmaban el juicio de los "25" que se convertirían en uno de los principales polos de oposición a la dictadura.

Esta oposición se vio sujeta a tantos matices como sectores tiene la CGT. Ante la asunción de la presidencia de la Nación por parte del general Leopoldo Galtieri, en diciembre de 1981, declaró Ubaldini: "el sector obrero es prescindente de la actual situación institucional y por lo único que reclama es por un cambio social y económico", reiterando "el pedido de retorno al estado de derecho" y opinando que "la asunción del nuevo jefe militar [Galtieri] en la más alta función pública no

despierta para los trabajadores expectativa alguna", para declarar finalmente "el fracaso total y absoluto de la pretendida gestión gubernamental del llamado Proceso" por lo que reclaman un gobierno de emergencia nacional⁵⁴.

El resultado de todo esto fue que, por un lado, la Interseccional CNT "20" queda comprometida negociando con los militares; y por otro, las relaciones entre el gobierno y la CGT están poco menos que coradas a raíz de la actividad de ésta última. De todas maneras el plan de acción de la CGT es llevado adelante, si bien con altibajos, para culminar en la movilización del 30 de marzo de 1982.

El 2 de abril las Fuerzas Armadas toman las islas Malvinas; ello produce un notable cambio en la cúpula gremial. Horas antes de conocerse el hecho, la Interseccional programaba un paro, mientras que la CGT afirmaba que el proceso militar "está en desintegración y en desbande" y reclamaba un gobierno de transición cívico-militar hacia la democracia⁵⁵. Días más tarde los mismos dirigentes se encontraban viajando por el mundo declamando los derechos sobre el territorio en litigio; discutiendo el análisis de la CIOSL que acusaba al gobierno militar de "ocupar las islas Malvinas para desviar la atención de los problemas de libertades democráticas en el país". Serán escasos los dirigentes que mantendrán su postura. Dirá Juan José Taccone: "... Debo confesar que humanamente me encanté trabado para cumplir la misión que se me había encomendado. Mi memoria se trasladó a recordar estos seis largos años que hemos vivido, de represión política y gremial, mi amigo y compañero Oscar Smith secuestrado, igual que ocho compañeros más, delegados de mi gremio; sindicato intervenido, sus derechos destruidos..."⁵⁶.

La derrota de las Malvinas pone en evidencia el fin del Proceso, con lo que tanto políticos como sindicalistas se lanzan a una actividad febril para poder controlar la apertura. A su vez hacen esfuerzos inhumanos para no presionar a las Fuerzas Armadas, de manera que éstas se puedan retirar en or-

den sin que se descontrole la situación. Diría por ese entonces un político argentino en el exilio: "Los dirigentes políticos y sociales argentinos se ven arrastrados, muy a pesar suyo, por una fuerza telúrica, hacia la Casa Rosada"⁵⁷.

Debemos extraer varias conclusiones en tomo a la dirigencia sindical durante el Proceso. Lo fundamental es que en su rol de intermediaria entre la base obrera y el Estado dictatorial, la burocracia sirvió una doble función: por un lado, frenó la lucha obrera esforzándose por canalizarla dentro de los marcos del Proceso; por otro, ese mismo esfuerzo, combinado con sus propios intereses y la presión de la base, tuvo el efecto de observar y eventualmente contribuir al fracaso de los objetivos laculizar y eventualmente contribuir al fracaso de los objetivos del régimen para con el movimiento obrero argentino.

Asimismo se evidenció una separación muy grande entre la base y las cúpulas sindicales, que se veía reflejada en los insistentes llamados y presiones de los primeros para que los segundos tomaran posiciones más combativas. De hecho, el problema de la legitimidad del dirigente sindical que se abre con el Cordobazo en 1969, no se resuelve con el golpe de 1976, sino que meramente se congela. Los sectores más lúcidos de la burocracia mostraron una clara conciencia del problema. Es así que los marinos aprobaron y apoyaron el trabajo de las comisiones clandestinas y la coordinadora de gremios durante 1980 en los conflictos con el régimen. Y que la dirección de SMATA, en particular José Rodríguez, se alineó junto a la base hasta el punto de participar junto a los trabajadores de Deutz en la toma de la fábrica. Es ilustrativo de esto el hecho de que la mayoría de los pronunciamientos de los sectores internos o de las agrupaciones de base del sindicalismo condenan al colaboracionismo y a la división sindical sin distinguir entre CNT, CGT, "20" o cualquier otro nucleamiento nacional.

Resumiendo, el desarrollo mismo de los conflictos obreros va haciendo que se modifique el rol de la burocracia con relación al régimen. Así ésta pasa de un dialoguismo discreto en 1976, a la Jornada de Protesta Nacional en 1979 y la CGT de

1981. Surgirá así una dialéctica en torno a las medidas de fuerza desde la base que llevan a la burocracia a tratar de frenarlas, pero que en este intento debe asumirlas e impulsarlas para impedir que se descontrolen.

NOTAS

- 1 Arturo Fernández, *Las prácticas sociales del sindicalismo (1976-1982)* (Buenos Aires: CEAL, 1985), pág. 22. Nótese que en ningún momento se plantea que los dirigentes burocratizados son totalmente irrepresentativos. Existen distintos niveles de burocratización de un dirigente al igual que existen distintos tipos de dirigentes. Por lo general podemos apuntar que en la base sindical existen tantas tendencias políticas e ideológicas como existen en la cúpula. Así el dirigente burocrata se mantiene en el poder combinando el fraude, las presiones y la violencia junto con un sector del gremio que efectivamente lo avala. De ahí la complejidad en los procesos de democratización de un gremio. Lo fundamental de la burocratización de sectores de la dirigencia gremial es que estos dejan de actuar como representantes de las bases y se convierten en intermediarios entre estos y la patronal.
- 2 Juan Carlos Portantiero, "Clases dominantes y crisis política en la Argentina actual", en Oscar Braun, comp., *El capitalismo argentino en crisis* (Buenos Aires: Siglo XXI, Editores, 1973), pág. 102.
- 3 *Idem*.
- 4 *Ibid.*, 103.
- 5 Mónica Peralta Ramos, *Acumulación del capital y crisis política en Argentina (1930-1974)* (México: Siglo XXI, 1978), pág. 142.
- 6 Dirá un *Documento del Consejo Ejecutivo de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina*, Julio 1967, citado por Peralta Ramos, *op. cit.*, 142: "(...) los trabajadores y los sectores populares del país, desde 1945 nos hicimos legalistas. Creíamos en la Ley y en el camino de la Ley para defender nuestros intereses nacionales y sociales (...) Cuando se produjo la contrarrevolución de 1955 y se operó la restauración de los privilegios de algunos sectores de la población y del imperialismo, nos encontramos desarmados: nuestras organizaciones servían para actuar dentro de la ley, no fuera de ella. Además nuestros dirigentes habían sido educados para la negociación y no para la lucha (...) terminamos defendiendo nuevamente la legalidad, ignorando que esa legalidad no era la del pueblo ni la de los trabajadores ni la de la patria, sino la legalidad del privilegio colonialista (...) Ese camino no podía conducirnos sino al desastre (... Hay que) formular pública-

- mente propuestas sobre lo que hay que hacer para que ello no vuelva a repetirse".
- 7 Portantiero, *op. cit.*, 101.
- 8 *Ibid.*, 104.
- 9 Fernández, *op. cit.*, 101.
- 10 *Latin America Political Report* (LAPR), 13 de febrero de 1976.
- 11 Fernández, *op. cit.*, 73.
- 12 Santiago Senén González, *Diez años de sindicalismo argentino* (Buenos Aires: Corregidor, 1984), pág. 61.
- 13 Alvaro Abbós, *Las organizaciones sindicales y el poder militar (1976-1983)* (Buenos Aires: CEAL, 1984), pág. 8.
- 14 Ver: denuncia realizada por Raimundo Ongaro en S.R.S. de la Federación Gráfica Bonaerense, *Situación sindical en la República Argentina* (Mimeo, 1978).
- 15 Abbós, *op. cit.*, 10; y Senén, *op. cit.*, 69.
- 16 Abbós, *op. cit.*, 124-125.
- 17 Senén, *op. cit.*, 70.
- 18 *Idem.*
- 19 Ver: *Clarín* 2 al 5 de marzo de 1977.
- 20 Abbós, *op. cit.*, 37; y *Denuncia*, septiembre, octubre y noviembre de 1978.
- 21 Ver: Presidencia de la Nación Argentina, *Documento de trabajo sobre las bases políticas para la reorganización nacional* (Buenos Aires: Mimeo, Agosto 1978), pág. 31.
- 22 Ver: *Clarín*, *La Opinión y El Cronista Comercial* del 7/XI al 10/XII de 1977.
- 23 P. López, "El difícil camino de la unidad sindical", en *Denuncia* octubre 1978; y Abbós, *op. cit.*, 37-38.
- 24 Senén, *op. cit.*, 86.
- 25 *Ibid.*, 96; y *Denuncia*, 15 de enero al 15 de febrero de 1979.
- 26 Abbós, *op. cit.*, 123.
- 27 Informe de Michael Boggs y Andrew McLellan en el *Boletín de la AFL-CIO* citado por el Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA), *Hemispheric Report*, Washington: diciembre 1977.
- 28 Roberto García, *Paria sindical versus paria socialista* (Buenos Aires: Depalma, 1980), pág. 58-59.
- 29 *La Nación*, 16/V/78.
- 30 P. López, "Se formaliza la división sindical", en *Denuncia*, noviembre 1978.
- 31 *Idem.*, Fernández, *op. cit.*, 77-80; y Abbós, *op. cit.*, 39-40.
- 32 *Denuncia*, agosto 1981.
- 33 Senén, *op. cit.*, 97 y 157.
- 34 *Denuncia*, enero 1979.
- 35 Citado en Senén, *op. cit.*, 90.
- 36 Senén, *op. cit.*, 115.
- 37 *Clarín*, 28/III/79.
- 38 Para todas estas declaraciones ver: *Clarín*, del 23 al 28 de abril de 1979.
- 39 P. López, "Situación agitada"; en *Denuncia*, noviembre 1979; Fernández, *op. cit.*, 80; y Abbós, *op. cit.*, 60.
- 40 Fernández, *op. cit.*, 78.
- 41 *Denuncia*, noviembre 1979; y Bloque Sindical del MPM, *Crónica de la resistencia sindical argentina*, octubre 1979.
- 42 Ver: *Clarín* para enero 1980; y Bloque Sindical del MPM, *op. cit.*, febrero de 1980.
- 43 Ver: *Clarín*, enero 1981.
- 44 *Denuncia*, febrero 1980.
- 45 *Clarín*, 9 de abril de 1980.
- 46 *Denuncia*, mayo 1980; y Abbós, *op. cit.*, 60-61.
- 47 *Clarín*, 25 de marzo de 1981; Jesús Iglesias Rouco, "¿Hacia una nueva CGT?", en *La Prensa*, 8 de enero de 1981.
- 48 P. López, "Los de abajo se mueven", en *Denuncia*, junio 1980.
- 49 Abbós, *op. cit.*, 62.
- 50 Senén, *op. cit.*, 135.
- 51 *Denuncia*, diciembre 1981.
- 52 Iglesias Rouco, *op. cit.*
- 53 Fernández, *op. cit.*, 100; y *Denuncia*, diciembre 1980.
- 54 Senén, *op. cit.*, 159.
- 55 *Ibid.*, 165; y Abbós, *op. cit.*, 87.
- 56 Senén, *op. cit.*, 166.
- 57 Héctor Sandler (diputado 1973-1976 por UDELPA) en conferencia realizada en la C.A.S. México D.F., México, julio 1982. Nótese las declaraciones de distintos partidos políticos. Algunos ejemplos inmediatamente previos a la Guerra de las Malvinas fueron: el Partido Comunista Argentino declaró, a mediados de 1981, que desaban "el retorno a la Constitución, pero eso no significa que los

militares deban volver a los cuarteles" (*Denuncia*, junio-julio de 1981); Deolindo Bittel, por ese entonces vicepresidente primero del Justicialismo, dijo en esa misma época, que "quisiera que este proceso triunfe a pesar de que a algunos peronistas no les guste" (en una entrevista radial); el ex ministro peronista Miguel Unamuno expresó que "sería lamentable que este Proceso termine en una derrota de las Fuerzas Armadas" (*Denuncia*, junio-julio de 1981). Ejemplos posteriores a la Guerra de las Malvinas fueron: Raúl Alfonsín declaró (hay que decirles) "a los militares que no nos hemos juntado para derrotarlos", mientras llamaba a la movilización popular pero "sin espíritu de revancha"; el demócrata cristiano Francisco Cerro planteó que "hay que fortalecer al gobierno militar para fortalecer al gobierno civil que lo suceda en 1984" (*Denuncia*, septiembre de 1982).

CAPITULO V LA REORGANIZACION NACIONAL Y EL MOVIMIENTO OBRERO

El proyecto de la gran burguesía financiera para la reorganización nacional de la Argentina no se inició el 24 de marzo de 1976 sino muchos meses antes con la aparición de la Triple A, el Operativo Independencia y el plan económico del ministro de Economía, Celestino Rodrigo. Sin embargo, este proyecto se efectiviza a partir del momento en que las Fuerzas Armadas toman el poder y lo detentan exclusivamente, sin frenos institucionales.

Los objetivos del nuevo proyecto para el sindicalismo y el movimiento obrero se explicitan en el *Documento de Trabajo sobre las Bases Políticas para la Reorganización Nacional*, de agosto de 1978, que fue circulado para la discusión interna. Allí se sintetizaba el pensamiento del régimen:

*"Economía lo más abierta posible que permita ejercer nuestra capacidad de competencia, no sólo en el mercado local sino en el mercado mundial. Para ello será necesario transformar en eficientes todas aquellas empresas que aún condicionan la eficiencia global de la economía."*².

"Esta sociedad ha estado signada por la presencia de caudillos que coartan la movilidad política y se convierten por lo tanto en factores de inestabilidad alimentando, con su actitud demagógica, falsas expectativas."

En lo sindical presenta arálogas características de estrai-

ficación, pocas opciones para una adecuada movilidad vertical lo que obstruye; el acceso de nuevos dirigentes y crea frustraciones."³

"A efectos de asegurar un funcionamiento normal de esas entidades, y que aquellos que tienen de asumir carácter de líder lo hagan con verdadero sentido representativo, se impedirá la acumulación de poder económico en este tipo de entidades. De tal forma se eliminará, por un lado, la posibilidad de corrupción; y por otro lado, que a través del poder económico se obtenga poder político.

"Será incompatible la actuación política de los dirigentes gremiales, salvo cuando a través del sistema institucional previsto sean elegibles para participar en la actividad política."⁴

"Deben dictarse las leyes fundamentales de: Asociaciones Gremiales de Trabajadores (...). Es necesario quitar a estos organismos el poderío económico que proviene de la acumulación de la riqueza, dado que cuando éste se agrega a la fuerza gremial, corrompe la función de sus dirigentes e incluye poderío político."⁵

"Los conductores políticos y sindicales, tienen que ser renovados y reemplazados por nuevos protagonistas más jóvenes, compensados con los prepositos y objetivos del Proceso de Reorganización Nacional."⁶

De este documento se desprenden varios ejes:

- 1) el debilitamiento del sindicalismo en general;
- 2) la creación de un sindicalismo "apolítico", colaboracionista;
- 3) el fin de la independencia económica del sindicalismo;
- 4) la sustitución de los líderes sindicales, por aquellos más compenetrados con el Proceso;
- 5) todo lo necesario para crear un sindicalismo que se ajuste a las necesidades de una "economía abierta" y competitiva.

I

Debemos considerar que para el PRN el aspecto "economía abierta" es central a todo el proyecto, siendo "necesario transformar en eficientes todas aquellas empresas que aún condicionan la eficiencia global de la economía". El símbolo de la fuerza obrera y de la resistencia a la eficiencia en las fábricas fue la *comisión interna*. Tanto para los empresarios como para el Proceso, el delegado gremial personificaba los problemas básicos con los cuales ellos tenían que enfrentarse en la campaña por aumentar la tasa de explotación.

Surgidas en el período posterior a 1946, las comisiones internas aceptaban en general que su tarea básica era la de supervisar la implementación diaria de las provisiones contenidas en el contrato. Pero ya en la década de 1950 éstas habían asumido el rol más amplio de afianzar la seguridad de la clase obrera y limitar las prerrogativas de la patronal en la esfera productiva. Los empresarios percibían claramente que éste era el principal obstáculo a una racionalización efectiva y la imposición de una disciplina de trabajo⁷. Los puntos de fricción con los trabajadores no eran solamente aspectos salariales sino principalmente el control sobre las condiciones de trabajo. Es evidente que hacia 1976 los empresarios consideraban la limitación efectiva en el poder de las comisiones como imprescindible para lograr algún progreso en su proyecto. Cualquier introducción de esquemas de incentivos, el acortamiento de los tiempos para hacer una tarea, la limitación en la reciprocidad y la garantía de mayor movilidad en el trabajo, o sea un aumento en la tasa de explotación, se vería potencialmente anulado en la práctica por una clase obrera decidida y su comisión interna.

Es por esta razón que, un año antes del golpe, se inició una oleada represiva —dirigida por las Fuerzas Armadas y avalada por dos decretos firmados en noviembre de 1975 por el presidente interino Italo Luder— dirigida a sofocar la guerrilla y el "terrorismo industrial"⁸. Esta represión se agudizó después del

golpe. Es así como a través de 1976 y 1977 se ejecutan una serie de medidas y "actos de servicio" que significaron la desaparición o muerte de numerosos delegados y activistas sindicales, la detención de dirigentes, la ocupación de los lugares de trabajo por efectivos armados y una ola de terror destinada fundamentalmente a allanar el camino para la transformación del movimiento obrero organizado. Al mismo tiempo se intervinieron la CGT y los principales gremios del país que nucleaban al 75% de los trabajadores sindicalizados.

Dice Arturo Fernández: "Todo el sector contestatario del movimiento obrero fue depurado con los más brutales métodos, contando con la complicidad activa o pasiva del sector patronal y, a veces, de grupos sindicales amarillos (...) Asimismo, durante 1976, se intentó y se logró en buena medida eliminar las comisiones internas de fábrica, los delegados y los comités de seguridad e higiene de un elevado número de empresas. Para ello se contó con la disposición antiobrera del sector patronal y con la delación, la infiltración y la presencia militar en las plantas. No todos los miembros de comisiones internas ni todos los delegados de fábrica eran elementos radicalizados pero, por su juventud y honestidad, podían constituir un obstáculo al plan de disciplinamiento de la clase obrera. Por otra parte, era conveniente desarticular la vida sindical, arribándola de su base natural que se encuentra en los lugares de trabajo".⁹

El régimen había ampliado su concepto de subversión hasta incluir el curioso concepto de "la guerrilla industrial". Ante la pregunta de un periodista sobre qué es la subversión?, respondió el general Jorge Videla, comandante en jefe del Ejército y titular de la Junta de Comandantes: "No es sólo lo que se ve en la calle. Es también la pelea entre hijos y padres, entre padres y abuelos. No es solamente matar militares. Es también todo tipo de enfrentamiento social"¹⁰. Para esta concepción jerárquica de la sociedad los obreros deben obedecer a los padres como si fueran sus padres. El paternalismo y la dependen-

cia laboral eran las claves del sistema socioeconómico a ser creado.

Como resultado de esta concepción la represión que se debía debía ser de proporciones mayores. Por ejemplo, en Berisso y Ensenada fueron detenidos todos los delegados, subdelegados, paritarios y miembros de listas de oposición de Propulsora Siderúrgica, Asilleros Río Santiago y Frigorífico Swift. En Ford el Ejército entraba en las plantas fabriles y se instalaba en el mismo lugar de trabajo. "En el campo de deportes de Ford estuvo instalada durante mucho tiempo una guarnición del Primer Cuerpo de Ejército. Alrededor de cien delegados fueron detenidos, desmanielándose totalmente la comisión interna. Muchos trabajadores fueron sacados de sus puestos, al pie de las máquinas, y detenidos con un destino siempre incierto. (...) He aquí algunos testimonios directos de la represión en Ford, en boca de los trabajadores del establecimiento.

El ejército no entró apenas se dio el golpe. Si rodearon Ford con camiones y jeeps, armados hasta los dientes, nos registraban uno por uno y llevaron muchos compañeros detenidos. Nos revisaban los cofres, los vestuarios, hacían requisas permanentes...

Se llevaron a los delegados, subdelegados, activistas. Destrozaron el cuerpo de delegados y a muchos, poco antes del golpe o durante el propio golpe; la compañía los apremió para que renunciaran. (...)

Cuando se instaló el ejército acá dentro se llenaron las arcas, se llevaron todas las maderas de importación que antes nos llevábamos los operarios. El cartón de deshecho, todo eso que era beneficio para algunos compañeros, se lo llevaron ellos...

Acá dentro hay muchos superintendentes, capataces, de todo, que son retirados del ejército, de la marina o de la aeronáutica (...)

Acá hubo unos cien desaparecidos. Muchos aparecieron después como detenidos y muchos han sido soltados. Otros

nunca aparecieron. La mayoría han estado presos en Devoto, en Sierra Chica, otros fueron a parar a Córdoba y otras partes...
Uno estaba trabajando y tenía un soldado con un fusil al lado..."¹²

Se calcula que en los primeros días del golpe en el Gran Buenos Aires hubo más de 1.200 secuestros por fuerzas de seguridad. El día 26 de marzo la fábrica Peugeot fue invadida por carros blindados, los obreros fueron concentrados en el pabellón central y los documentos fueron revisados uno por uno. Idénticas operaciones se realizaron en Chrysler donde se llevaron a diez delegados. Seis más fueron detenidos en la fábrica de Alpargatas y en la siderúrgica Gurmendí se llevaron a otros veinte.¹³ Más de 200 obreros fueron secuestrados en Villa Constitución sin que ninguna fuerza de seguridad reconociera haberlos detenido. En la misma zona, el gobierno militar estableció una fuerza provincial de seguridad conocida como "Los Pumas", cuyos efectivos se alojaban en forma permanente en la planicie de Acindar.¹⁴ Decenas de cadáveres aparecieron a través del país mutilados bárbaramente. A mediados de 1977 la O.I.T. denunció la existencia de 18.000 desaparecidos y 6.000 presos políticos, entre ellos 400 sindicalistas, en la Argentina.¹⁵ Dada la magnitud de la represión y sus características, es evidente que el régimen debe haber contado con el apoyo decidido de los empresarios a través de los encargados de personal los cuales podían facilitar la infiltración de un lugar de trabajo al igual que señalar los activistas.

II

Las medidas represivas estuvieron legitimadas por toda una serie de decretos-ley, amparados por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a pesar de la evidente inconstitucionalidad de los mismos. Comenzaron con las "Medidas

Inmediatas de Gobierno" enunciadas en las "Bases para la Intervención de las Fuerzas Armadas en el Proceso Nacional", emitidas el 24 de marzo de 1976.¹⁶ En el Anexo 1 de dichas "Bases" se consigna:

"3. De Indole Laboral

"3.1. Reordenamiento de la actividad sindical, a través de la revisión de la Ley de Asociaciones Profesionales, de Contrato de Trabajo, de Paritarias y otros instrumentos legales.

"3.2. Suspensión temporaria de la actividad sindical en lo que respecta a nuevas reivindicaciones, mientras dure el reordenamiento expresado en 3.1.

"3.3. Mantenimiento de las obligaciones patronales existentes respecto del sector laboral hasta que se produzca el reordenamiento indicado en 3.1.

"3.4. Disolución de todo agrupamiento gremial que desarrolle actividades políticas.

"3.5. Efectivo control de los fondos sindicales y de obras sociales gremiales.

"3.6. Suspensión temporaria del derecho de huelga.

"3.7. Mantenimiento de un adecuado nivel salarial"¹⁷.

A estas "Medidas" se agregaron una serie de decretos-ley que reglamentan los criterios enunciados. Algunos de estos decretos fueron:

Ley 21.261, que suspende el derecho a la huelga y prohíbe toda medida que afecte a la producción (28/III/76);

Ley 21.263, que elimina el fuero sindical (28/II/76);

Ley 21.297, que elimina todos los derechos laborales (24/IV/76);

Ley 21.400, que prohíbe toda medida concertada de acción directa, paro, interrupción o disminución del ritmo de trabajo que serán sancionados con uno a seis años de prisión, y cuando la instigación se hace pública con tres a diez años (3/IX/76);

Ley 21.476, que elimina todos los regímenes especiales (15/XII/76).

Esta política de transformación del movimiento obrero or-

na manera lo beneficia". Agregó que "[soy] enemigo de la violencia y el terrorismo, pero pienso que los saldos de la subversión aprovechan estas circunstancias, perjudicando la actitud de los trabajadores en estado de necesidad. Lo importante es que el gobierno trate de evitar estos aprovechamientos de la violencia, diferenciando y reconociendo las reales necesidades atinentes al salario. No llegar a confundir al trabajador que reclama por sus legítimos derechos con el subversivo [...]".²⁶ A su vez, los justicialistas, en un documento firmado por siete dirigentes encabezados por Italo Luder, declararon que "hemos seguido el actual proceso" pero mientras se padezcan "situaciones opresivas para vastos sectores populares" será difícil "crear condiciones generadoras de la paz".²⁷ Se pronunció el titular del Partido Federal, Francisco Manrique: "Más allá de la seguridad personal, se presenta cada día más deteriorada la situación económica, que no se contrarresta ya en los hechos con declaraciones, cifras o gráficos oficiales, una inestable e inorgánica vida sindical, una latente inquietud laboral, una confusa política exterior [...] Estas son las preocupaciones del presente argentino, pero el futuro obliga inquietudes aún más acuciantes".²⁸ También Oscar Alende, titular del Partido Intransigente, enjuició: "El plan económico de Martínez de Hoz ha fracasado [...] la sociedad argentina está muy herida".²⁹

Al igual que los políticos, el empresariado manifestaba su inquietud. La Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIM) evaluó que "el país vive un momento en el cual son claramente perceptibles los perfiles de una crisis".³⁰ El economista Alfredo Allende afirmó que "nadie —nativo o extranjero— invertirá en un país de vigorosa retracción de mercado, de impuestos elevados por el inmodificado déficit estatal y de una situación social potencialmente explosiva".³¹ A todo ello se agregaron otras declaraciones. En una reunión realizada a principios de abril por 110 dirigentes de multinacionales europeas, japonesas y norteamericanas en Buenos Aires, bajo los auspicios de

la Business International Corporation, dijo Kazukiyo Morito, representante japonés: "La radiación de capitales es una posibilidad que no se arregla solamente con la ley de Inversiones Extranjeras. Son necesarias otras circunstancias que brinden un marco propio de seguridad general." Agregó otro empresario: "Lo que aún genera reservas es el margen de rentabilidad que puedan lograr las empresas que se instalan en la país".³²

Todo esto llevó al entonces ministro del Interior, general Albano Harguindeguy a reiterar que "los partidos políticos, en su mayoría, tal cual los conocemos entre 1973 y 1976, no tienen cabida en la Argentina del futuro". Y especificó que "no llegó ni está a la vista la apertura política partidista que algunos ven", amenazando al mismo tiempo con encarcelar a los dirigentes políticos que violen la prohibición de actividad política partidaria.³³ Para algunos esto tuvo su efecto. Balbín declaró que el general Videla es "un gran general para la democracia". Y el radical Raúl Alfonsín estableció que los objetivos del gobierno no están delineados "con la precisión suficiente como para que podamos abrir juicio".³⁴ Pero la realidad era que el juego político se había abierto, y la base material era el miedo al descontrol social que generó la movilización obrera de fines de 1977.

Lentamente la dictadura se vio forzada a modificar su táctica hacia el movimiento obrero. Durante 1978 y 1979, si bien se mantuvo un nivel represivo sensiblemente alto, se enfatizó más la reestructuración del sindicalismo, tratando de cooptar a ciertos sectores de la burocracia con promesas de participación. Se apuntaba a fraccionar a la clase favoreciendo ciertos sectores. Por ejemplo, un obrero automotriz ganaba casi el doble de un textil; y un obrero en Mercedes Benz, más que uno en Peugeot.³⁵

A partir de 1978 son las mismas Fuerzas Armadas las que, reconociendo su falta de hegemonía, van minando la "legalidad" establecida a partir del golpe de 1976. A pesar de la prohibición de las medidas de fuerza, éstas continuaban produ-

mico, el movimiento obrero organizado logró movilizar a otros sectores sociales en oposición al régimen³⁷. De esta manera el movimiento obrero fue lentamente ganando un margen de acción y conformando su propia "legalidad" frente a la "legalidad" del régimen.

Los problemas que encuentran los militares para doblegar al movimiento obrero no los hace desistir de su objetivo. Al contrario, se esfuerzan por avanzar lo más sólidamente posible, modificando algunos medios, para lograr la transformación del movimiento obrero organizado en un instrumento dócil del P. R. N. Es así como durante 1979 y 1980 la Junta Militar combinó distintos métodos para lograr sus fines. Estos fueron:

- 1) represión selectiva;
- 2) utilización de la burocracia sindical para frenar las luchas y la reorganización obrera;
- 3) otorgamiento de ciertas mejoras económicas a algunos sectores, de manera que a partir de agosto de 1978 se va a permitir la flexibilización salarial;
- 4) el establecer una base "legal" para su reorganización.

El cuarto punto era fundamental puesto que representaba un peligro para el movimiento obrero organizado. Leyes que figuren en los estatutos, aunque sean de dudosa constitucionalidad, son difíciles de revertir y sientan precedentes para el futuro. A su vez representa un nuevo frente de batalla y el intento más serio de institucionalizar el proyecto del régimen. A partir de 1979 había que combatir no sólo contra la reorganización del movimiento obrero sino también contra la base legal que lo permite.

\VI

El pilar de la nueva legislación sindical fue indudablemente la Ley 22.105, de Asociaciones Profesionales, aprobada el 15

157

ciéndose y los militares negociaban como si no existiese la Ley 21.400. Asimismo, estaba prohibida la participación política del sindicalismo, y sin embargo se vulnera esta prohibición al citar a los sindicalistas a dialogar con el ministro del Interior, general Albano Harguindeguy. Los ejemplos más notables se hallan en una serie de conflictos y medidas de fuerza, a mediados de 1979, que fueron resueltos por comandantes militares de unidades locales al margen de los dictámenes del Ministro de Trabajo³⁶.

Lo real es que a dos años del golpe militar, éste ya había comenzado a perder margen de maniobra frente al sindicalismo. La represión continuaba a niveles elevados, pero se tornó más selectiva. Las medidas de fuerza no se respondían con la ocupación de las fábricas y los encarcelamientos o las desapariciones masivas. En cambio se utilizaron una serie de métodos que iban desde la amenaza hasta la represión directa, e incluían el otorgamiento de una parte de las demandas laborales y la utilización de la burocracia para poner fin a los conflictos en aras de negociaciones con la patronal. Pero el método fundamental seguía siendo el tratar de identificar a los activistas en los lugares de trabajo para golpearlos. Es así como, en muchas ocasiones, al finalizar una medida de fuerza son secuestrados algunos de los trabajadores que el régimen supone están al frente de la lucha.

Para el régimen era evidente, ya a mediados de 1978/principios de 1979, que la represión no había alcanzado el éxito deseado. A pesar de su profundidad y extensión, a pesar de haber "ganado la guerra" contra la guerrilla, no han logrado dominar a los trabajadores. Durante 1979, el secuestro de activistas sindicales, lejos de desarmar a los trabajadores y desorganizarlos, fue motivo para que se retomasen las medidas de fuerza. Las Fuerzas Armadas tuvieron que cejar en varios casos y liberar a los activistas secuestrados. Inclusive, como lo demostró la Jornada de Protesta Nacional que contó con el apoyo de pequeños y medianos empresarios afectados por el plan econó-

156

ganizado tiene varias etapas que no deben ser vistas linealmente, sino que se van desarrollando a veces en forma conjunta. Estas serían: 1) etapa de guerra, cuyo objetivo fundamental es la derrota del movimiento obrero a través de la represión; 2) etapa de reorganización del sindicalismo y su readecuación al Proyecto de Reorganización Nacional (PRN), que incluye una nueva legislación laboral, la reestructuración de los gremios, la disolución de la CGT, la cooperación de dirigentes gremiales; 3) etapa de institucionalización, centrada entre otras cosas en la formación de un partido político oficial (el Movimiento de Opinión Nacional o M. O. N.) basado en un pacto militar-político-sindical; 4) Nueva República, que se plasmaría en un nuevo funcionamiento socio-político nacional, basado en las transformaciones realizadas y legitimado en una nueva constitución nacional. Se trataba así de readecuar el sindicalismo a las necesidades de una "economía abierta y competitiva", ubicada dentro del "mundo occidental y cristiano" y reubicada dentro de la nueva división internacional del trabajo capitalista. En términos de tiempo, la primera etapa debería ser relativamente rápida y profunda, eliminando actuales y futuros obstáculos, para poder desarrollar las otras con relativa libertad de acción.

Es de notar que el régimen no tenía la intención de destruir la vinculación Estado-sindicalos, ni tampoco eliminar el sindicalismo. Por el contrario se trataba de readecuar los gremios, eliminando su relativa independencia y fortaleciendo la dominación del aparato estatal sobre éstos. Se intentaba mantener la organización sindical existente, por considerarla la más apropiada para lograr el objetivo esencial de disciplinar el movimiento obrero; y al mismo tiempo aumentar su dependencia del Estado recortando su poder económico y estableciendo limitaciones a la actividad política de los dirigentes.

El criterio fundamental que sostuvo la opinión mayoritaria dentro de los partidarios de la dictadura "de no destruir la vinculación Estado-sindicalos y que fue usado con insistencia

por la cúpula gremial peronista moderna, fue el de no regalar ese campo al enemigo izquierdista, comunista o subversivo; se pensó y se dijo que una transformación radical de la vieja vinculación Estado-sindicalos sería aprovechada por el comunismo u otras fuerzas equivalentes para ganar posiciones en las nuevas estructuras autónomas de un movimiento obrero presumiblemente dispuesto a reconstruirse"¹⁸. La cabeza más visible de esta postura fue el ministro de Trabajo, general Horacio Liendo, que se lanzó a una complicada política de captación de dirigentes gremiales recompensando y promoviendo aquellos que se mostraran "razonables" y complacientes. Trataba de presentarse como el "mal menor" frente a la crisis del sindicalismo, prometiendo tolerancia a los dirigentes que se avinieran al juego.

Si bien la política que expresaba Liendo era la dominante, no era la única. Los generales Luciano Benjamín Menéndez y Carlos Suárez Mason favorecían una política de tierra arrasada con respecto al sindicalismo. Por el contrario, el Almirante Emilio Massera, jefe de la Armada, propugnaba la consolidación del régimen en el aparato estatal a través de la conformación de un partido oficial. Para esto era necesario obtener la colaboración del peronismo de derecha por lo que había que negociar acuerdos con sindicalistas como Lorenzo Miguel de la UOM. Nótese que en los tres casos mencionados las diferencias eran tácticas; en ningún momento cuestionaron el proyecto ni tampoco se dudó de la necesidad de reprimir a fondo. La pregunta, más que nada, era ¿qué rol, si alguno, jugará el sindicalismo en el Proceso?¹⁹

Así "la política laboral no era un proyecto lineal sino que estaba sometida a los avatares de un juego sutil de presiones y reacciones, que los militares suponían controlar [...]"²⁰. Este juego dependía de una relación dialéctica entre la resistencia de la base obrera, la actitud de los sindicalistas y la correlación de fuerzas dentro del mismo grupo dominante. Evidentemente, el grado de resistencia tendría efectos sobre los sindicalistas y

sultado fue contundente. El 95% de los trabajadores se pronunció por la afiliación sindical, mientras que el 5% no respondió o se pronunció por la desafiliación²³. Esto ya era un presagio de las dificultades que tendría el régimen para imponer su hegemonía.

Las huelgas de fines de 1977 cambiaron el panorama político nacional. Los conflictos representaron un serio problema para el régimen. La suspensión legal de los canales orgánicos sindicales junto con la clandestinidad de los activistas gracias a la represión, forzó la organización desde la base. Así la dictadura se enfrentó a una oleada de medidas de fuerza dirigidas por conducciones descentralizadas y clandestinas. Era difícil visualizar con quién había que negociar y a quién había que reprimir. La prensa nacional volvió a hablar del peligro de descontrol social. Así el resultado más importante de las medidas de fuerza fue que el régimen se vio obligado a aceptar un rol más activo por parte del sindicalismo para devolver organización y control sobre los conflictos. De hecho, el cambio esquivo implícitamente reflejado en la renuncia, el 30 de diciembre de 1977, del ministro de Planeamiento, general Ramón Díaz Besone, encargado de la planificación y puesta en práctica de la "Argentina del año 2.000". Algunos observadores atribuyeron esta renuncia a las contradicciones internas de las Fuerzas Armadas agudizadas por el malestar social²⁴. Asimismo es notable que algunos sectores, particularmente la Marina encabezada por Massera, estuvieran dispuestos a aprovechar la actividad obrera para tratar de incrementar su poder político dentro del régimen²⁵.

Los partidos políticos cuyo silencio durante el primer año y medio de la dictadura fue notable, se sintieron obligados a pronunciarse en favor de un retorno a la democracia, si bien en forma relativamente ambigua. Dirá Ricardo Balbín, principal dirigente de la UCR: "el consenso que tenía el Gobierno en marzo de 1976 no es el mismo que tiene ahora", atribuyendo ello a "un desgaste natural" y a un "aislamiento que de ningun-

sobre los distintos sectores dominantes; y a su vez la reacción de éstos frente a la presión obrera la alimentaría o no. Un nivel de resistencia obrera apreciable terminaría creando fisuras en el régimen impulsando a los sindicalistas a tomar posiciones más decididas.

Así vamos a encontrar que la intranquilidad de los obreros durante 1977, genera tensiones en el régimen militar. Por ejemplo, el ministro de Trabajo, general Liendo visitó la planta de General Motors, en conflicto, y dialogó con los trabajadores declarando que comprendía la difícil situación económica que padecían. Al día siguiente la Marina ocupó la fábrica. A su vez, el general (RE) Juan Carlos Reyes, al frente de YPF, anunció que habría 15.000 despidos entre los obreros petroleros. Mientras tanto, varios generales al frente de la represión, por ejemplo Carlos Chasseing, gobernador de facto de Córdoba, se oponían a la política de despidos masivos por miedo a fomentar "la guerrilla industrial". Diría el gobernador de Tucumán, general Antonio Bussi: "Por cada guerrillero que matan las fuerzas de seguridad, la política económica de Martínez de Hoz crea cinco más"²¹. También, a principios de 1977 el Almirante Massera, jefe de la Armada, secundado por el comandante del Cuerpo III del Ejército, general Luciano Benjamín Menéndez pedía que Liendo fuera separado de su cargo por ser demasiado conciliador con el movimiento obrero²².

III

El ejemplo concreto de los problemas que sufrió la planificación del régimen respecto del movimiento sindical fue el censo realizado a fines de 1976. Las Fuerzas Armadas procedieron a efectuar un censo, donde los trabajadores debían responder si mantenían la afiliación a sus sindicatos, o si por el contrario deseaban desafilarse. En el marco de la represión y de una tremenda campaña propagandística antisindical, el re-

de noviembre de 1979. Esta Ley empezó a tratarse en la Comisión de Asesoramiento Legislativo desde marzo de 1976 y estuvo sujeta a intensas negociaciones y presiones. Su promulgación significó un duro golpe al sindicalismo. En síntesis, sus principales disposiciones fueron:

a) Artículos que intentaban impedir un sindicalismo fuerte y centralizado:

1. Se prohibía formar sindicatos que excedieran el marco de cada una de las provincias o de la Capital Federal (Art. 5);
2. Se limitaba la autorización a formar federaciones a los sindicatos con personería gremial (o sea los más numerosos de cada sector) y se reducían la facultades de las federaciones autorizadas a concertar convenios colectivos y actuar en representación de los trabajadores ante el gobierno, a pedido de aquellos o de éste (Art. 37);
3. Se disolvía la CGT (Art. 75)

b) Artículos que atacaban contra el sindicalismo combativo contra la democracia sindical:

1. Se dieron amplias y discrecionales facultades al Ministro de Trabajo para aceptar o no sindicatos de empresa, ya que según la Ley la zona de actuación mínima "*contemplará el desarrollo económico de ella y las características de la asociación*" (Art. 5);
2. Los dirigentes y delegados sindicales deberían carecer de antecedentes penales "o policiales" lo cual afectaba a muchos que habían sido detenidos en distintos momentos por cumplir con sus funciones gremiales (Arts. 16 y 18);
3. Se limitaba el número de delegados de personal a un porcentaje máximo del uno por ciento, proporción que no podría modificarse por convenciones colectivas ni reglamentos de empresa, con lo cual se suprimía la y llamanamente a los delegados de sección (Art. 19);
4. Se prohibía celebrar asambleas sin comunicar con antelación la fecha, hora y terreno al Ministerio de Trabajo (Art. 22);
5. Se establecía como obligación de los sindicatos la de

"mantener relaciones con los empleadores con criterio de *co-laboración y solidaridad social*", cuyo incumplimiento podría dar lugar a la cancelación de la personería o a la intervención del Ministerio de Trabajo (Art. 30);

6. La intervención del Ministerio de Trabajo a los organismos sindicales era inapelable (Art. 16);

7. De hecho, se eliminaba la estabilidad de los delegados y dirigentes gremiales, ya que las patronales podían despedirlos y sólo tendrían que pagar una indemnización (Art. 54)

c) Artículos que buscaban evitar que la burocracia sindical actuara como factor de poder, pero que además perjudicaban estratégicamente al conjunto de los trabajadores:

1. Se le quitaba a los sindicatos la administración de las obras sociales (Art. 9);
 2. Se prohibía a los sindicatos toda actividad lucrativa (Art. 11);
 3. Se prohibía a los gremios toda actividad política, directa o indirecta (Art. 8);
 4. Se prohibía a las federaciones recibir contribuciones directas de los obreros e intervenir sobre las asociaciones afiliadas (Art. 38);
 5. Se prohibía fijar cuotas obligatorias a los trabajadores no afiliados (Art. 45)³⁸
- Aparte de la Ley 22.105, durante 1980 se aprobaron modificaciones a los estatutos y regímenes de distintos gremios, y el 8 de agosto se aprobó la nueva Ley de Obras Sociales que buscaba eliminar el poder económico del sindicalismo reduciendo su efectividad y aumentando su dependencia de la patronal y el Estado. Esta Ley quitaba a los sindicatos el control sobre obras sociales tales como hospitales, farmacias, hoteles y agencias de turismo, cuyo valor total era calculado en unos 2.000 millones de dólares³⁹.
- Esta nueva Ley, número 22.269, disponía en sus puntos salientes:
1. El afiliado podría o no optar por hacer uso de las presta-

lizaría al sindicalismo en unidades pequeñas, separadas, controlados y dirigidos por el Estado. El mero hecho de que la ley promulgada permitía, por omisión, la formación de nuevas confederaciones, una vez disuelta la CGT, refleja las limitaciones que tres años después del golpe sufría el proyecto militar. Es así que si bien el empresario recibió las nuevas leyes con gritos alborozados, por debajo se notaba cierta inquietud. Dijeron varios empresarios a Clarín: "No creo que la nueva ley termine con el poder sindical [...] Inmediatamente después de marzo de 1976, el gobierno debería haber reformado esta ley, la de obras sociales, la de contrato de trabajo y la de negociaciones colectivas. No lo hizo. Fue un error político"⁴².

El régimen dio un plazo hasta el 29 de febrero de 1980 para que el sindicalismo se acogiera a la nueva ley de asociaciones. Este plazo fue alargado hasta el 29 de marzo ante la resistencia de los gremialistas. Los interventores de la UOM presentaron un proyecto para dividir el gremio en trece regionales. Sin embargo, y a pesar de los distintos incentivos y amenazas, las seccionales de los gremios intervinieron rechazaron categóricamente cualquier reestructuración. De esta manera, al vencer el plazo dado, unas 2.000 organizaciones sindicales habían solicitado que se les reconocieran las estructuras existentes, sin adecuarias a la nueva ley. Dijo Clarín: "Con el vencimiento del plazo establecido para la inscripción de las actuales organizaciones sindicales solicitando su ámbito de actuación [...] se inicia en forma concreta el proceso de normalización sindical reiteradamente anunciado por las autoridades militares [...] El hecho de que casi la totalidad de las entidades gremiales haya cumplido el plazo podría interpretarse como una victoria de las autoridades laborales [...] pero debe ser analizado más detenidamente, ya que lo que los gremios han hecho hasta ahora sólo ha sido cumplir el trámite necesario para no perder sus personerías [...]"⁴³.

Al rehusarse a ser partícipes de la reestructuración de sus gremios, los gremialistas quitaban legitimidad a la medida y al

161

ciones que le otorga el ente de Obra Social del que sea o le corresponda ser beneficiario;

2. En caso de no optar sólo debería acreditar que se hallaba incorporado a una entidad de prestaciones médicas habilitada a tal efecto;

3. Se asignaba a los prestadores carácter de "financiadores de servicios", completamente desvinculados de las asociaciones gremiales;

4. Los entes de Obras Sociales quedaban desligados de las organizaciones gremiales, poseyendo individualidad jurídica y el sistema sería conducido por el Instituto Nacional de Obras Sociales, en la órbita del Ministerio de Acción Social;

5. El Poder Ejecutivo decidió la eliminación del aporte patronal del 15% con destino a las jubilaciones y el 5% para el Fondo Nacional de la Vivienda y resolvía el reemplazo de dichos aportes automáticamente del producto de impuestos contribuidos⁴⁰.

La nueva Ley de Obras Sociales empeora significativamente el nivel de vida del trabajador que obtenía bienes y servicios baratos a través del sindicato. En 1972, un 68% de la población económicamente activa y un 55,4% del total de habitantes de la Argentina estaban asegurados por las Obras Sociales sindicales⁴¹. Al mismo tiempo la Ley apunta a socavar profundamente las bases sociales del sindicalismo, puesto que elimina la muestra más concreta del beneficio que al trabajador le traen los sindicatos, y al mismo tiempo pasan ambos, sindicato y afiliado a ser más dependientes del Estado y de las empresas privadas que administrarían estas obras.

Estas leyes representaron un campo de batalla muy importante para el régimen, pero no reflejan todo lo que el mismo se proponía realizar en términos de reorganización sindical. El proyecto original contemplaba la prohibición de las entidades de tercer grado (confederaciones) y la restricción del campo de acción de las de segundo (federaciones). Se planeaba en el anteproyecto de Ley una nueva normatividad que reinstituiona-

160

misión tiempo ponían el peso político, social y moral de la misma sobre los hombros del Ministerio de Trabajo. Que la respuesta fue exitosa lo demuestra la lentitud del Ministerio en aplicar la Ley a partir de abril de 1980. En enero de 1981 el régimen sólo había podido aprobar la zona de actuación de unas 385 entidades de primer grado. Al mismo tiempo los gremialistas reconstituían la disuelta CGT y formaban la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Prensa, la Coordinadora de Gremios Estatales, la Coordinadora de Gremios del Transporte, vulnerando incisos de la Ley. A esto hay que agregar la cada vez más abierta participación política de los gremialistas. Por su parte, las mismas necesidades del régimen lo llevaron a vulnerar su propia Ley al reconocer las zonas de actuación de la ATE, la UOCRA y de la Unión Ferroviaria planteando que eran "casos especiales"⁴⁴. Únicamente en el caso del Sindicato del Hielo hubo una readecuación total.

Estos hechos llevaron a que algunos voceros del régimen trataran de alentar expectativas en términos de cambios a la Ley. Concretamente el general Viola, que unos meses más tarde sucedería al general Videla en la Presidencia de facto de la Nación, declaró el 8 de enero de 1981 que posiblemente estaría decidido a introducir ciertas modificaciones en la Ley de Asociaciones Profesionales. Tales modificaciones hasta permitirían el funcionamiento de entidades de tercer grado⁴⁵. Es evidente que ante la resistencia del movimiento obrero organizado el régimen ofrece ceder en algunos aspectos a cambio de ganar margen de manobra.

Conjuntamente con estos ofrecimientos, durante el mes de marzo se suceden una serie de especulaciones en torno al Movimiento de Opinión Nacional, tan deseado por el régimen para conformar su base de sustento social necesaria para la institucionalización. El Economista hizo referencia a conversaciones en curso para la conformación de una alianza militar-sindical la cual atraería a un sector del peronismo y posiblemente del radicalismo a la base de apoyo al régimen⁴⁶. La Prensa

nombraba al sindicalista Triacca, de la CNT, como uno de los posibles gestores de una convergencia político-militar-sindical⁴⁷. El mismo Viola hizo repetidas referencias a que sectores potables del peronismo podrían participar del Proceso. Y el ministro de Trabajo, brigadier Julio César Porcile opinó que el justicialismo es "una doctrina nacional que usa la misma bandera que yo y, por lo tanto, no puedo considerarlo negativo para los planes de normalización"⁴⁸.

Las maniobras del régimen, si bien le ganaban tiempo, no detuvieron su lenta decadencia, como lo demuestran la segunda Jornada de Protesta Nacional y el plan de acción de la CGT durante 1981 y 1982. Dada el dirigente papetero Fernando Doñares: "Los parches en el gobierno a esta altura no sirven y no tienen razón de ser. La única alternativa válida para las Fuerzas Armadas es institucionalizar el país serio y responsablemente"⁴⁹.

Y

Hacia diciembre de 1981, momento en que asume la presidencia el general Leopoldo Fortunato Galtieri, era evidente que si bien se habían logrado algunos éxitos parciales (obras sociales, debilitamiento organizativo), el régimen no había logrado dar forma a un sindicalismo "apolítico", colaboracionista, que se ajustase a las necesidades del PRN. Muy por el contrario, el sindicalismo adquiría características cada vez más políticas impidiendo la hegemonía del Proceso.

En la práctica el movimiento obrero había colocado a las Fuerzas Armadas ante un dilema. El PRN requería el control de los sindicatos y su integración al Proceso como complemento social al proyecto económico. Para poder controlar al sindicalismo debían debilitarlo, pero para que éste controle a su base, debe mantener una fuerza orgánica. Esta fuerza significa que el dirigente gremial se ve sujeto, con diversos grados

95

de permeabilidad, a la presión de sus bases y tiene la capacidad de tomar medidas de fuerza y actuar en el juego político. Si el sindicalismo desarrolla un plan de acción, esto puede jaquear la hegemonía del régimen y obstaculizar su plan económico. Pero si este plan es bloqueado, está el peligro que la base deje atrás a las direcciones y desarrolle su propio plan, descontrolándose.

El desarrollista Rogelio Frigerio lo dice con claridad, en una entrevista que realizó la revista Esquú.

"Esquú: Se insiste, desde la oposición, en el pronóstico de tensiones sociales graves, derivadas de la persistencia de la inflación y la depresión del salario. ¿Cree que los sindicatos están en capacidad para desarrollar una ofensiva de esta índole?"

Frigerio: A mi juicio ese pronóstico es exacto. En todo caso, si esta política se mantiene y si los sindicatos no están en condiciones de canalizar adecuadamente la inquietud existente, las reacciones se producirán de mane: a inorgánica desde las bases; lo cual será pernicioso para el orden y la paz social que son dos requisitos indispensables para el desarrollo nacional.

Se equivocan los que juzgan desaprensivamente la situación nacional. El caso argentino no es asimilable a otros que se toman como término de comparación. [...] De ese análisis en la Argentina habría que sacar dos conclusiones: la primera, cambiar la política que engendra las tensiones; la segunda, normalizar la actividad sindical para evitar que los conflictos se manifiesten de manera inorgánica y de difícil control"⁵⁰.

A mediados de 1981 quedaba claro lo que había sido evidente para algunos de los analistas más perspicaces desde 1979: el PRN había fracasado en su intento por resolver la "crisis orgánica" del capitalismo argentino. La política sindical global no había tenido el éxito esperado y la actividad política de los dirigentes gremiales nucleaba a distintos sectores que cuestionaban la hegemonía del régimen. A través de las huel-

gas generales de 1979 y 1981 se reinsertaron en el panorama nacional aquellos sectores que fueron desplazados el 24 de marzo de 1976.

El intento de golpe del general Luciano Menéndez en Córdoba (1979), el derrumbe financiero y la ola de quiebras, los reajustes económicos del ministro de Economía Lorenzo Sigaut (1981), la formación de la Multipartidaria (julio de 1981), el golpe palaciego de Galtieri (diciembre de 1981) son algunos de los indicadores que marcan el fracaso del PRN⁵¹. Esto lo reflejaría el editorial del Wall Street Journal del 25 de marzo de 1981: *"La experiencia Martínez de Hoz [...] es un sobrio recordatorio de lo difícil que es revertir los procesos de intervención y control económico estatal una vez que se han afianzado firmemente [...] no se deben subestimar el poder de los vínculos que se han forjado entre el gobierno, la industria y los trabajadores y las fuerzas alineadas en contra de los esfuerzos para restablecer la competencia de mercado"⁵². Mientras que en el país, los dirigentes políticos Oscar Alende, Néstor Vicente, Conrado Storral y José María Rosa publicaban un libro intitulado *El Ocaso del "Proceso"*; su olfato les indicaba que el régimen estaba *"herido de muerte"*⁵³.*

Concordando con esta apreciación, diría el Almirante Masera:

"Como antiguo coprotagonista del Proceso, mi propia desazón no conoce límites cuando veo, a más de cinco años de haber dado comienzo a lo que iba a ser una etapa importante de la historia, que no hemos alcanzado ninguno de los objetivos, excepto la victoria armada contra el terrorismo.

[...] Mientras millones de ciudadanos eran llevados a la pobreza, selectos grupos de elegidos aumentaban sus riquezas sin el menor pudor, sobre la base de la especulación y a costa de destruir el aparato de producción. Ya ni vale la pena hablar de esas cosas, pero no creo que haya un solo argentino que no lo sepa, que no lo mastique en su legítimo resentimiento.

[...] Cinco años son muchos días, son muchas horas, son

muchas ligerimas, son muchos esfuerzos, que se han diluido en el tiempo. Es un precio muy alto pagado por las mujeres y los hombres de esta tierra, como para que ahora nos confortemos diciendo que se hizo un experimento y el experimento falló. Y falló. Hay que recorrer la República como yo lo hago para comprobar que de una punta a la otra la ciudadanía está convencida de que falló [...]"⁵⁴.

Todo lo anterior lo admitió el flamante presidente de facto de la Nación, general Leopoldo Galtieri en su primer Mensaje a la Nación, después de haber derrocado a su antecesor, el general Viola. Dirá Galtieri:

"Sé que el tiempo de las palabras y las promesas se ha agotado. Incluso se ha agotado. Incluso sé que las palabras han perdido su fuerza y su poder de convocatoria [...]. No le pedimos a la ciudadanía confianza y consenso en lo inmediato, porque la confianza y el consenso se ganan con el ejemplo, coherencia y eficiencia en los actos de gobierno [...]. Sería ilusorio negar una determinada inmovilidad que nos ha ganado, una apatía que parece invadirnos, una falta de credibilidad [...]. Sé que el apoyo de la ciudadanía, sustento insustentable para la tarea emprendida, no será posible de lograr íntegramente por haber triunfado en la guerra que se libró contra la subversión marxista [...]. Ha sido arduo el camino recorrido y grande el desgaste sufrido: ello no nos permite arriesgar lo que resta. En consecuencia, reclamamos un comportamiento austero y un cuidadoso uso de la hacienda nacional, que no está para atender a las exageradas necesidades de un gigantesco ente burocrático.—que ya no está al servicio del país— y al cual debemos redimensionar [...]"⁵⁵.

En este contexto el régimen se lanza a la Guerra de las Malvinas. La derrota militar a mediados de 1982 confirmó lo que ya era ineludible en 1981. El Proceso de Reorganización Nacional había fracasado. Las Fuerzas Armadas prepararon su retirada a los cuarteles cediendo paso a la apertura democrática de 1983.

NOTAS

- 1 Presidencia de la Nación Argentina, *Documento de Trabajo sobre las Bases Políticas para la Reorganización Nacional* (Mimeo, Agosto, 1978).
- 2 *Ibid.*, 14.
- 3 *Ibid.*, 15.
- 4 *Ibid.*, 31.
- 5 *Ibid.*, 11.
- 6 *Idem.*
- 7 Para una excelente exposición sobre el rol de las comisiones internas y lo que representan para la clase obrera: Daniel James, "Racionalización y respuestas de la clase obrera: contexto y limitaciones de la actividad gremial Argentina"; en *Desarrollo Económico* N° 83, octubre-diciembre 1981, págs. 321-349.
- 8 Rodolfo Walsh, "Historia de la guerra sucia en la Argentina", en Horacio Verbitsky, *Rodolfo Walsh y la prensa clandestina 1976-1978* (Buenos Aires: Ediciones de La Urraca, 1985), pág. 17.
- 9 Arturo Fernández, *Las prácticas sociales del sindicalismo (1976-1982)* (Buenos Aires: CEAL, 1985), pág. 56.
- 10 *Revista Gente*. Buenos Aires, 15 de abril de 1976.
- 11 Secretaría de Relaciones Sindicales de la Federación Gráfica Bonaerense (SRS), *Situación Sindical en la República Argentina* (Mimeo, marzo de 1978), vol I.
- 12 Alvaro Abós, *Las organizaciones sindicales y el poder militar (1976-1983)* (Buenos Aires: CEAL, 1984); pág. 12-13.
- 13 Alfredo Sirkis, *A Guerra da Argentina* (Río de Janeiro: Ediciones Record, 1982), pág. 175.
- 14 Agencia de Noticias Clandestinas (ANCLA), 11 de agosto de 1976.
- 15 Cadena Informativa, Informe No. 12, agosto 1977, en Verbitsky, *op. cit.*, p. 45. Una fuente calcula que el 53,7% de todas las desapariciones en la Argentina, entre 1976 y 1983, corresponden al movimiento obrero. Estadística del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos del Cono Sur (CLAMOR), San Pablo, Brasil. Otros cálculos son más altos. El primero de diciembre de 1977, el Senador Edward Kennedy incluyó en las Actas del Senado de los Estados Unidos una estadística sobre la represión en la Argentina.

Kennedy calculó en ese entonces que el 31.3% de la población carcelaria argentina se encontraba detenida por actividades como dirigentes sindicales o activistas. Ver *Denuncia*, febrero 1978, pág. 5.

16 Junta Militar, República Argentina, *Documentos básicos y bases políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional* (Buenos Aires: Imprenta del Congreso de la Nación, 1980), págs. 13-24.

17 *Ibid.*, 22.

18 Fernández, *op. cit.*, 68-69.

19 *Latin American Political Report (LAPR)*, 2 de junio de 1978, pág. 165.

20 Fernández, *op. cit.*, 69.

21 ANCLA, 15 de marzo de 1977; LAPR, 25 de junio de 1976, pág. 198; y LAPR, 6 de agosto de 1976, pág. 242.

22 ANCLA, 16 de marzo de 1977.

23 SRS, *op. cit.*

24 LAPR, 7 de agosto de 1978. *Denuncia*, febrero 1978, pone el énfasis en las diferencias internas a las Fuerzas Armadas. Carlos Gabetta, "Les rivalités s'exaspèrent entre factions militaires", en *Le Monde Diplomatique* (Abril 1978), pág. 14, explica la renuncia en *Monde Diplomatique* (Abril 1978), pág. 14, base al "descontento generalizado" y los conflictos entre Díaz Bessone y el ministro de Economía Martínez de Hoz, por lado, y el proyecto político del almirante Emilio Massera.

25 *Denuncia*, mayo 1978, citando a Inner Press Service y a *Le Matin* de París del 9 de abril de 1978. También el *Buenos Aires Herald*, 14 de noviembre de 1977. De acuerdo a Carlos Gabetta, Massera "sueña con una alianza política susceptible —a pesar de sus viejos rencores— de reunir a la derecha peronista, los tecnócratas del gobierno de Frondizi y la derecha radical. En cuanto al plan económico, se trata de llevar a cabo una política diferente a la de Martínez de Hoz (que el almirante Massera no cesa de criticar) que restablezca un equilibrio que favorezca casi exclusivamente a los grandes propietarios y a los industriales ligados a la agricultura". De ahí que Massera declarase que: "La violación de los derechos humanos incumbe exclusivamente al Ejército. La Marina y la Aeronáutica no la cometieron para nada. Al contrario, nosotros exigimos la publicación de las listas completas de presos, su presentación ante la jurisdicción civil y un rápido retorno a la

democracia". Ver Carlos Gabetta, "Les rivalités s'exaspèrent entre factions militaires", en *Le Monde Diplomatique* (Abril 1978), pág. 14.

26 *Denuncia*, enero 1978; *La Razón*, noviembre 7, 1977.

27 *La Opinión*, noviembre 29, 1977.

28 *La Razón*, diciembre 1, 1977.

29 Cable de AFP, diciembre de 1977, en el Archivo "Editorial Denuncia" de Nueva York.

30 *Clarín*, 11 de diciembre de 1977.

31 *Clarín*, 18 de febrero de 1978.

32 *Denuncia*, mayo 1978. Ver también el informe de Horacio Lofredo, *Perspectivas económicas para Argentina* (Washington: Consejo de Asuntos Hemisféricos, febrero 1978)

33 *Clarín*, 26 de abril de 1978.

34 *Denuncia*, mayo de 1978, citando a *El Nacional* de Caracas, del 6 de abril de 1978.

35 Ver índices salariales publicados por *El Economista* del 28 de marzo de 1980.

36 Anónimo, *La situación laboral argentina*. Informe para el Argentine Information and Service Center (AISC) (Córdoba: Mimeo, enero de 1980).

37 LAPR, 4 de mayo de 1979, pág. 132.

38 Alberto De Pablo, "La nueva ley antisindical", en *Rearme* no. 5 (México, D.F.: marzo de 1980).

39 Alberto De Pablo, "Reestructuración capitalista y lucha obrera"; en *Rearme* No. 6 (México, D.F.: agosto-setiembre de 1980).

40 Santiago Senén González, *Diez años de sindicalismo argentino* (Buenos Aires: Corregidor, 1984) pág. 137.

41 Fernández, *op. cit.*, 66.

42 *Clarín*, 20 de noviembre de 1979.

43 Citado en Senén González, *op. cit.*, 131.

44 *Denuncia*, marzo de 1980, pág. 4

45 *Clarín*, 9 de enero de 1981.

46 Rodolfo Panđolfi, "Análisis político", en *El Economista*, 13 de marzo de 1980.

47 Jesús Iglesias Rouco, "¿Hacia una nueva CGT?", en *La Prensa*, 8 de enero de 1981.

48 Citado por Senén González, *op. cit.*, 152.

49 *Ibid.*, 159.

50 *Esquivá*, 18 de marzo de 1979.

51 Cables de la agencia de prensa Prensa Latina (PRELA, Archivo "Editorial Denuncia") trazan la crisis en la interna militar citando a la revista *Fuente Reservada*. Allí se cita un conflicto silencioso entre el general Roberto Viola y su antecesor Jorge Videla en torno al traspaso de mando y el futuro del plan económico, ligando todo a los problemas generados por el malestar obrero de principios de año. Ver PRELA 17 de febrero, 10 y 11 de marzo. Asimismo, véanse los temas que se transluce en los artículos de la revista *Newsweek*, del 16 de marzo de 1981 ("Argentina: A Crackdown on Rights" por John Brecher) y del *New York Times* del 22 de marzo de 1981 ("Accomplice to Terror" por Anthony Lewis).

52 *Wall Street Journal*, 24 de marzo de 1981. Nótese que a mediados de 1981 el ex presidente de facto general Juan Carlos Onganía fue condenado por el Ejército a unos días de arresto debido a que declaró públicamente que "la Junta Militar está tratando de eludir toda responsabilidad de los desastres del país". El Almirante Massera había sido arrestado días antes por declaraciones similares. Y el comandante del Cuerpo I, general Antonio Bussi, haciendo gala de un repertorio populismo, se entrevistaba con dirigentes sindicales con vistas a un acercamiento.

53 Oscar Alende, *et al.*, *El Ocaso del "Proceso"* (Buenos Aires: El Cid Editor, 1981). Aquí es interesante apuntar dos datos. En abril de 1979 el autor participó de una mesa redonda sobre "Argentina, hoy", en el congreso de la Latin American Studies Association (LASA) realizado en Pittsburgh, EE UU. La discusión fue presidida por el Dr. Samuel Rosenberg, de la State University of New York, y asistieron los encargados de América Latina para varias multinacionales, representantes del Pentágono, el Colegio de Guerra de los EE. UU., y la Embajada Argentina en Washington, D.C., entre otros. La opinión de los representantes de las multinacionales era unánime en que el proyecto de Martínez de Hoz había fracasado; a diferencia del Pentágono que sostenía que era un éxito. También a principios de 1979, el autor tuvo la oportunidad de revisar un estudio encargado por la multinacional japonesa Mitsubishi sobre lo aconsejable o no de invertir en la Argentina. La conclusión era que el régimen no podía garantizar tranquilidad laboral a largo plazo, por lo tanto si se

realizaban inversiones éstas debían ser de tipo especulativo a corto plazo, preferiblemente invirtiendo en la plaza financiera o adquiriendo aquellos sectores del aparato productivo argentino que pudieran redituar grandes ganancias a corto plazo. En ningún momento se aconsejaba una inversión productiva. Corroborando esto, *Denuncia* de agosto 1979, cita un informe reservado por el cual se informaba que en una reunión entre banqueros norteamericanos y el ministro de Economía José Martínez de Hoz, los primeros le expresaron su preocupación por la situación argentina, considerando al país un mal riesgo para inversiones.

54 Discurso del Almirante Massera, pronunciado el 2 de octubre de 1981, en *Cambio*, año I, no. 9, 7 de octubre de 1981, pág. 11. Citado en: Arnold Spitta, "El Proceso de Reorganización Nacional de 1976 a 1981: los objetivos básicos y su realización práctica", en Waldman y Garzón Valdés, *op. cit.*, 77.

55 *La Voz del Interior*, Córdoba, 24 de diciembre de 1981.

25